



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES
DE LA
CAMARA DE REPRESENTANTES

XLV LEGISLATURA

PRIMER PERIODO ORDINARIO

49ª SESION (EXTRAORDINARIA Y PERMANENTE) (Continuación)

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES

DOCTOR WASHINGTON ABDALA
(PRESIDENTE)

DOCTOR FELIPE MICHELINI
(3er. Vicepresidente)

Y JUAN JUSTO AMARO CEDRES
(4to. Vicepresidente)

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES

DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVAN
Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCION CORBO

SUMARIO

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
CUESTIONES DE ORDEN		9) Comisiones Permanentes, integradas y Especiales. (Autorización para reunirse durante el receso).....	57
2 y 6) Integración de la Cámara..	3 y 43		
8 y 11) Intermedio.....	57 y 64	ORDEN DEL DIA	
2 y 6) Licencias.....	3 y 43	1, 3, 5, 7 y 10) Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)	
		(Ver 49ª sesión del 12.12.00)	
VARIAS		En discusión particular.	
4) Comisión de Legislación del Trabajo. (Autorización para reunirse durante el receso).....	39	—	

Sumario (continuación)

Págs.Págs.

— Se resuelve pasar a estudio de la Comisión de Legislación del Traba-

jo los artículos aditivos que figuran en las Hojas Nos. 3, 4 y 6. 2, 4, 40, 45 y 58

1.— Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Continúa la sesión.

(Es la hora 13 y 12)

— Prosigue la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)".

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Falero, Barandiaran, Michelini, Pintado y Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara de Representantes deje sin efecto la declaratoria de urgente consideración del proyecto en debate, de acuerdo con el literal c) del numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República".

— En discusión.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Señor Presidente: nuestra intención es que esta moción se considere antes de ingresar a la discusión particular. Sus fundamentos fueron expresados ayer en Sala por el señor Diputado Michelini y sólo solicitamos su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— La Mesa solicita que ingresen a Sala los señores Diputados que se encuentran en el Ambulatorio, porque estamos en el límite del quórum necesario.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: apoyo la moción presentada, pero me veo en la obligación de aclarar que si utilizamos el mismo criterio que aplicó la Mesa en el día de ayer, todavía no puede ser puesta a consideración en la medida en que la Constitución exige el voto de tres quintos de los componentes del Cuerpo para levantar la declaratoria de urgente consideración y aún no se encuentra en Sala esa cantidad de señores Diputados.

Digo esto al señor Presidente porque en la segunda cosa que ponga a votación puede encontrarse con algún problema.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— El señor Diputado Pablo Mieres solicitó expresamente que al inicio de la sesión se pusiera a consideración esta moción. La Mesa está cumpliendo con la voluntad de un legislador y con el Reglamento, que así lo habilita. La Mesa debe ponerla a consideración, a menos que alguno de los firmantes la retire.

SEÑOR BAYARDI.— ¿Me permite, señor Presidente?

Ayer la Mesa interpretó -a mi criterio, correctamente- que no la podía poner a votación porque no había sesenta legisladores en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— La interpretación sensata de la Mesa es la siguiente: una vez que se solicita el tratamiento de la moción, debe ser puesta a consideración. Si se dispara el procedimiento, se vota, y si no hay sesenta legisladores, se pierde. ¿Qué vamos a hacer? No hay más remedio.

SEÑOR DIAZ.— ¿Me permite, señor Presidente?

Lo mejor sería que se retirara la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Eso es lo que estoy sugiriendo.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Señor Presidente: retiramos la moción y la volveremos a presentar cuando haya número suficiente de legisladores en Sala.

2.— **Licencia** **Integración de la Cámara**

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 13 de diciembre de 2000, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Roberto Bagalciague".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Treinta y dos en treinta y cuatro: **Afirmativa.**

En consecuencia, queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

(Antecedentes:)

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por el día de la fecha, debido a razones de índole particular.

Saluda a usted muy atte.

Daniel García Pintos
Representante por Montevideo".

Texto de la Citación

Montevideo, 12 de diciembre de 2000.

LA CAMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria y permanente (literal d) del numeral 7º del artículo 168 de la Constitución), en régimen de intermedio, mañana miércoles 13, a la hora 13, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas). (Carp. 769/000). (Informado). **(En discusión).**

Rep. 417 y Anexo I

Horacio D. Catalurda
Margarita Reyes Galván
Secretarios

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

Habiendo sido convocado para integrar el Cuerpo que usted preside en mi calidad de suplente del Rpte. Nacional Daniel García Pintos, comunico a usted que por esta vez no acepto dicha convocatoria.

Saluda a usted muy atte.

Yamandú Flangini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: 1) Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de diciembre de 2000.

2) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116

de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley N° 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley N° 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes

RESUELVE

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 13 de diciembre de 2000, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Yamandú Flangini.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 13 de diciembre de 2000, al suplente correspondiente siguiente de la hoja de votación N° 15 del Lema Partido Colorado, señor Roberto Bagalciague.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2000.

**Oscar Magurno, Guillermo
Alvarez, José María
Mieres".**

3.- Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)

— Continúa la consideración del asunto en debate.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

— Diecinueve en treinta y seis: **Afirmativa.**

En discusión particular.

SEÑOR DIAZ.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DIAZ.— Señor Presidente: pregunto si a nivel de los coordinadores se ha llegado a algún acuerdo para votar el proyecto por secciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— La Mesa recuerda a los señores Diputados que existen aditivos y sustitutivos, pero agradecería que hubiera algún mapa de ruta.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: nosotros tenemos el nuestro. Ahora está de moda la hoja de ruta; si se aprobó un Presupuesto con hoja de ruta, bien podemos aprobar una ley de urgente consideración de esa manera o hasta con un croquis.

Proponemos a la Mesa dos criterios. En primer lugar, que el proyecto se considere por secciones y que se pidan los desgloses por sección. En segundo término, que los aditivos se consideren al final de cada sección.

Adelanto que vamos a pedir que la Sección I se considere artículo por artículo y después acercáramos los desgloses correspondientes al resto de las secciones, que no serán más de diez.

SEÑOR LEGLISE.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGLISE.— Señor Presidente: estamos de acuerdo con el planteamiento del señor Diputado Bayardi, pero nos gustaría que lo explicara nuevamente, porque hay legisladores que recién están entrando a Sala. De esa forma, quedaría claro a todos quienes formamos parte de la Comisión cuál sería el procedimiento propuesto, que haría más ágil la discusión a fin de poder terminar en la noche de hoy con el tratamiento del tema.

SEÑOR BAYARDI.— ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: el proyecto tiene catorce secciones. Nosotros acordamos el criterio de votar por secciones -iríamos solicitando los desgloses correspondientes a cada sección- y solicitamos que los aditivos a las secciones sean considerados después de votar cada una de ellas.

Voy a alcanzar a la Mesa los desgloses que vamos a pedir en cada sección. Adelanto que

solicitaremos que la Sección I, que tiene seis artículos se vote artículo por artículo.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— Señor Presidente: hemos hecho consultas en nuestra bancada y no tenemos inconveniente en seguir el sistema que ha explicado el señor Diputado Bayardi. En consecuencia, consideraríamos el proyecto sección por sección, solicitando los desgloses correspondientes. Terminado el tratamiento de cada sección, consideraríamos las enmiendas, las modificaciones o los nuevos artículos que los señores Diputados consideren pertinentes.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Señor Presidente: compartimos el criterio propuesto por el señor Diputado Bayardi, pero además solicitamos que la Sección II se vote artículo por artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Se pasa a considerar la Sección I, "Fomento del empleo", que comprende los artículos 1º a 6º.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.— Fíjase en 0% (cero por ciento) desde el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001, la tasa de aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS) correspondiente para aquellos dependientes que a partir del 1º de enero de 2001 fueren contratados o reincorporados del Seguro de Desempleo, con el resultado de aumentar la cantidad de trabajadores de la empresa respecto a los que estuvieren efectivamente prestando funciones al 31 de agosto de 2000.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, no se consideran comprendidas en el inciso primero del presente artículo las empresas reguladas por el régimen del Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975.

Mensualmente esta tasa no podrá aplicarse a un número mayor de dependientes del que surja como aumento neto en la plantilla del mes comparada con la referida en el primer inciso. Si la diferencia fuere mayor al número de trabajadores ingresados con posterioridad al 31 de agosto de 2000, dicha tasa se aplicará sobre los últimos incorporados. Se encuentran comprendidas aquellas empresas que tengan actividad registrada en el Banco de Previsión Social al 31 de agosto de 2000.

Están comprendidos en el presente artículo los dependientes en Seguro de Desempleo parcial previsto en el literal C) del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981.

En aquellos casos en que se comprobare que el incremento de la nómina al amparo del beneficio incluido en el presente artículo, fuere consecuencia de maniobras por uno o más contribuyentes, sin incrementar el empleo efectivo, la misma dará lugar al pago de todos los tributos adeudados, más recargos, multas y demás infracciones que correspondan de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Sesenta y cuatro en sesenta y seis: **Afirmativa.**

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.— Redúcese en un 75% (setenta y cinco por ciento) para el sector construcción, para el personal comprendido en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, la tasa de aporte patronal previsional jubilatorio para los propietarios de obras privadas, por el período 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001. Este beneficio se aplicará exclusivamente a las tareas de construcción, y siempre que dichas obras sean iniciadas a partir de la vigencia de la presente ley o aquellas cuya ejecución se encontrara suspendida por más de seis meses hasta la fecha de promulgación de la

presente ley y se hubieran reactivado o se reactiven, en cualquier momento, a partir del 1º de noviembre de 2000.

No están comprendidas aquellas obras en que el Estado es el comitente, adquirente o concedente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender el período de la reducción establecida precedentemente".

— En discusión.

SEÑORA TOPOLANSKY.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.— Señor Presidente: queremos hacer una reflexión sobre los seis artículos de la Sección I, "Fomento del empleo".

Creo que esta sección es la más importante de este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, porque el problema de la falta de empleo -como se señaló con abundancia en la sesión de ayer- es hoy la prioridad número uno de los uruguayos.

Durante la campaña electoral, nosotros levantamos la consigna de un país productivo y solidario, y esa consigna tenía que ver con el trabajo y el empleo. Un país que no sea productivo es muy difícil que genere empleo, y más aún si no es solidario; porque puede ser productivo y no generar empleo. Estos dos términos deben ir juntos.

Asimismo, nos preocupa que hay muchas franjas de edades -no sólo los jóvenes- sobre las que se abate un gran desempleo. Probablemente las franjas de adultos sean las que están en una situación más dramática. Asimismo, nos preocupa que las únicas medidas que se toman tienen que ver con la eliminación de cargas, muchas de ellas vinculadas con el BPS, organismo cuya suerte va a ser incierta en la medida en que las generaciones no se vayan compensando. En algunos países del mundo como, por ejemplo, Italia, se está requiriendo mano de obra joven, entre otras cosas, para compensar su Banco de Previsión Social.

En estos seis artículos nada se habla de la calidad del salario ni del trabajo. Entendemos que es necesario generar empleo con determinada calidad de salario y de trabajo.

Consideramos que ese gran paquete de trabajos de limpieza y de seguridad en que hoy se emplea -o subemplea, para ser más exactos-

a una cantidad de gente, no reviste calidad de salario ni calidad de trabajo, y ni siquiera puede estar al límite de ello.

Advertimos con preocupación que a lo largo de estos seis artículos se pretende de manera pomposa fomentar el empleo, desarrollando sólo un punto, lo que nos genera grandes dudas con relación al Banco de Previsión Social. Entendemos que esta sección debería tener otro acápite o título, pues nos parece que la denominación "Fomento del empleo" es desmedida, le queda grande y constituye un engaño a la población, ya que con este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración no se va a dar más trabajo.

Quisiéramos que dentro de un año, en esta misma Sala, se hiciera un balance de cuántos puestos genuinos, con calidad de salario y de trabajo, aparecieron a partir de la aprobación de esta norma, que tiene un título muy grande y un contenido muy pequeño.

SEÑOR PEREZ MORAD.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PEREZ MORAD.— Señor Presidente: cuando en la sesión de ayer se estaba discutiendo en general el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración N° 2, uno tenía la sensación de haber vivido algo parecido a lo que había sucedido con el anterior proyecto de ley de este tipo, ya sancionado.

Los primeros artículos del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración N° 1 también refieren al fomento del empleo, es decir, ya se había plasmado lo mismo que se va a votar ahora. De hecho, se han estado aplicando estas medidas desde 1995 hasta 1999, lo que costó al Estado no recaudar US\$ 42:000.000 por año. Quiere decir que en el quinquenio 1995-1999, el Estado uruguayo perdió de recaudar US\$ 220:000.000 por aplicación de estas medidas, sin que haya bajado el índice de desempleo. Y nadie ha desmentido estas cifras.

Si bien consideramos que, de no aplicarse estas medidas, la situación podría ser peor, por este camino se está demostrando que lo único que hacemos es tratar de detener el crecimiento inevitable del déficit fiscal. Necesitaríamos políticas más activas.

Quisiera saber si los proponentes o quienes apoyan estos artículos han hecho una proyección cierta de cuál es la perspectiva, entre uno y cinco años, de que se generen más puestos

de trabajo aplicando estas medidas. Como la aplicación de estas medidas representa un costo económico, la proyección o la perspectiva debe ser realizada en forma muy estricta.

Por otra parte, quiero señalar que el 16 de noviembre próximo pasado hicimos una exposición de sesenta minutos sobre la emigración. En ella expresamos que las escasas expectativas de vida, la desesperanza, la falta de trabajo o los empleos cuyos sueldos no alcanzan para tener una vida digna y cubrir las necesidades elementales, son la causa fundamental de la emigración al extranjero de los uruguayos. También en esa oportunidad se demostró fehacientemente que los jóvenes -y los no tan jóvenes- son los que están emigrando e, inclusive, también lo hacen núcleos familiares enteros y cerebros calificados.

Consideramos que, a la luz de que en los últimos quince años se ha mantenido la misma línea económica, para el fomento del empleo se necesitan políticas más agresivas y no paliativas, a fin de revertir una situación que para nosotros es sumamente grave. No obstante, valoramos el apoyo de todos los sectores políticos por haber votado la creación de una Comisión para considerar el tema migratorio, que evidentemente analizará el fomento del empleo, que es la causa principal de la emigración de los uruguayos.

En otro orden de cosas -y sin salirme del tema-, quisiera hacer una aclaración. Nos causa mucho dolor que las barras sigan vacías cuando se votan leyes tan importantes como la que se está considerando en el día de hoy.

Somos testigos de que en el Palacio Legislativo se está aplicando un sistema de control exhaustivo que no ha sido el habitual en los últimos tiempos. Esto motivó que los pocos concurrentes a las barras -uruguayos con derecho a ocuparlas- ya no vengan y, dolorosamente, sigan vacías. Debido a la aplicación de estas medidas, se está generando una incomodidad y las personas desisten de concurrir a este ámbito. Hago este planteamiento a fin de que se revea la situación, porque como legislador me duele que después de las elecciones se aumente la distancia entre los Representantes y el pueblo. Quienes deberían estar sentados en la barra son los verdaderos dueños, quienes pagan los impuestos y también nuestro sueldo para que legislemos a su favor. Entonces, como ésta es su Casa y está vacía, nos preocupa que hagamos el máximo esfuerzo para que esté cada vez más llena con quienes

son sus verdaderos dueños, no para hacer oratoria para la barra -como aquí se ha dicho-, sino simplemente para que la señal que emita el Parlamento sea de deferencia hacia quienes nos han depositado su confianza.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— Señor Presidente: como nos encontramos en la instancia de la discusión particular y estamos tratando el artículo 2º, me voy a referir a esta disposición.

Creo que el artículo 2º es uno de los más trascendentes de este proyecto de ley, que no es de urgencia, sino que tiene declaratoria de urgente consideración, que es una cuestión diferente.

A través de esta disposición se establece una reducción del 75% en la tasa de aporte patronal previsional jubilatorio para los propietarios de obras privadas del sector de la construcción, con relación al personal comprendido en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001. Esto va a traer un movimiento notorio en la industria de la construcción; para eso está pensado.

En lo personal, como Representante por el departamento de Maldonado, creo que se trata de una disposición realmente trascendente, en tanto va a posibilitar que se reanude una serie de obras que en este momento se encuentran detenidas, lo cual, complementado con medidas de carácter municipal, hará que se ponga en funcionamiento la industria de la construcción, que es fundamental para nuestro departamento y para el país todo.

A nivel de la bancada del Foro Batllista, habíamos tomado dos resoluciones. En primer lugar, la ampliación de la franja de beneficiarios de esta exoneración. En el proyecto original del Poder Ejecutivo se preveía que las construcciones comprendidas debían tener un mínimo de mil metros cuadrados. Es evidente que nuestros delegados en la Comisión, la señora Diputada Saravia Olmos y los señores Diputados Ronald Pais y Acosta y Lara, han sido muy eficaces, porque ahora la disposición comprende a todas las obras.

Asimismo, era nuestro propósito que se extendiera el plazo previsto -es decir, que no fuera exclusivamente desde el 1º de enero de

2001 hasta el 31 de diciembre de 2001-, y a nivel de la Comisión se introdujo la asignación al Poder Ejecutivo de la facultad de establecer dicha extensión.

Reitero que me parece que ésta es una norma de real trascendencia, que va a movilizar la construcción, ocupando mano de obra, y a posibilitar la reanudación de una corriente de inversión muy importante.

SEÑOR MOLINELLI.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.— Señor Presidente: tal como expresaba el señor Diputado preopinante, se trata de una norma trascendente, ya que desde hace un tiempo todos los involucrados en el sector de la construcción -los empresarios, los trabajadores- vienen planteando la revisión de todo el sistema de aportes al Banco de Previsión Social.

Es indudable que esto es tan solo el inicio. Revisar todo el sistema de aportación al Banco de Previsión Social representa un trabajo más general y amplio, pero por algo hay que empezar. Y éste es un inicio positivo, que atiende los reclamos del sector, que implica una rebaja en el costo de la construcción y que, sin duda, va a provocar su dinamización.

En consecuencia, consideramos que ésta es una de las normas más positivas de este proyecto con declaratoria de urgente consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede continuar el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.— He finalizado mi exposición, señor Presidente.

SEÑORA ARGIMON.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA ARGIMON.— Señor Presidente: queremos hacer una reflexión especial respecto al artículo 2º de la Sección I, "Fomento del empleo", precisamente porque con relación a esta norma el Partido Nacional tuvo una consideración especial.

¿Por qué decimos esto, señor Presidente? Si

los señores Diputados realizan un estudio comparativo de este artículo, tal cual fuera enviado por el Poder Ejecutivo, con el que hoy se encuentra a consideración del plenario, advertirán que su redacción es bastante distinta. En el proyecto inicial se disponía una reducción del 100% de estos aportes, pero estableciendo ciertas condiciones: el metraje de las obras debía superar "los mil metros cuadrados edificados o su equivalente en construcciones civiles o viales", y también se estipulaba que debía tratarse de obras iniciadas a partir de la vigencia de la norma o de aquellas cuya ejecución se encontrara suspendida por más de seis meses y se reactivaran a partir del 1º de noviembre de 2000.

Como se podrá advertir, el texto sometido a consideración del Cuerpo es sensiblemente diferente. Como forma de aporte a la discusión de este artículo, el Partido Nacional consideró necesario avanzar en determinados aspectos, que ahora queremos mencionar.

En primer lugar, planteamos la posibilidad de eliminar la superficie establecida en el literal B) del artículo 2º, según su redacción original, ya que en el interior del país son muy pocas las obras en construcción que superan los mil metros cuadrados. Como resulta obvio, quienes defendemos la descentralización, entendíamos que se hacía una suerte de diferencia entre Montevideo y el resto de los departamentos.

En segundo término, entendimos también que era importante extender el plazo de este beneficio. Vista la coyuntura económica y quiénes son los destinatarios de este artículo -promotores privados que arriesgan patrimonio personal para el fomento de la industria de la construcción, que es uno de los sectores que más puestos laborales genera a nivel nacional-, consideramos que el plazo debía ser más extenso.

Y una tercera consideración que la bancada del Partido Nacional hacía con relación a este artículo tenía que ver con la posibilidad de incluir aquellas obras que estaban en construcción, puesto que -como ya he dicho- el proyecto original sólo comprendía las obras cuya construcción se encontraba suspendida y aquellas que empiecen a construirse a partir del 1º de enero de 2001.

En el día de ayer, el señor Diputado Pintado señalaba que con relación a determinados artículos, gracias al debate que se produjo, algunos legisladores fuimos cambiando o de alguna manera profundizando nuestro punto de

vista, en comparación con la posición originalmente asumida. Cuando en nombre del Partido Nacional planteamos los aspectos que acabamos de reseñar, también la bancada del Partido Colorado ingresó a ese debate, considerando estos elementos. Como resulta obvio, en las negociaciones uno no siempre consigue todo lo que plantea.

Desde este punto de vista queremos destacar las largas instancias de negociación de este artículo. Nos interesa resaltar esto por haber sido nuestra bancada la que profundizó en este artículo y trató de trasladar al ámbito de la Comisión algunas observaciones, que fueron muy importantes en esta negociación y que tienen que ver con el hecho de haber avanzado en este cuerpo normativo que hoy se somete a votación y que establece la eliminación de la superficie, cosa que -reitero- consideramos de gran importancia. El porcentaje se redujo, pero se incorporó un inciso que faculta al Poder Ejecutivo, si no a mejorar las condiciones, a establecer una prórroga del período de esta reducción, lo que entendemos es una buena señal.

En oportunidad de la visita del señor Ministro de Economía y Finanzas y de su equipo de colaboradores al ámbito de la Comisión, trasladamos la voluntad de nuestra colectividad política -para el Partido Nacional esto es de real importancia- de que se avanzara en una auténtica y profunda modificación de la forma de tributación de la industria de la construcción. En ese sentido, el propio señor Ministro transmitió su voluntad de avanzar en esa dirección, porque también él considera injusta esta forma de tributación.

Desde este punto de vista, la bancada del Partido Nacional consideró importante solicitar a la bancada del Partido Colorado que en este ámbito quedara bien claro que ésa fue la voluntad del Poder Ejecutivo, de avanzar en esta materia -expresada en oportunidad de solicitarle esta consideración al señor Ministro-, y que se lograra que ello figurara en la versión taquigráfica de esta sesión, en la que estamos presentes los Representantes en su totalidad.

Reitero que éste fue un punto en el cual la bancada del Partido Nacional hizo muchísimo hincapié. Y hoy adelanto que, precisamente, y como aporte a lo solicitado, quienes participamos en la Comisión que estudió este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración enviamos una nota al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, que

contenía una suerte de articulado como propuesta de trabajo para avanzar en esa reforma profunda de los aportes patronales en la construcción -que fuera redactado por el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez en agosto del presente año y trasladado a un grupo de asesores que estaba, precisamente, reuniendo material en forma previa a la elaboración de este proyecto de ley-, que por determinadas circunstancias no se pudo propiciar en esta instancia.

Por lo tanto, estamos trasladando al plenario la voluntad del Partido Nacional y lo conseguido en la negociación, y notificando que también estamos acercando al equipo económico un trabajo como base para avanzar en esta reforma tributaria.

SEÑORA RONDAN.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA ARGIMON.— Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA RONDAN.— Señor Presidente: de alguna manera, esto que se está dando aquí es el producto del trabajo de relacionamiento de los miembros de la Comisión. De alguna forma, en nombre del Poder Ejecutivo, quiero asumir el compromiso aquí, en este plenario, de que sí se va a estudiar la nueva forma de aportes, porque es algo que el señor Ministro ya planteó antes. De todas formas, quiero renovar este compromiso, que ahora no es sólo con los compañeros del Partido Nacional, sino con el plenario todo. Esos aportes se van a estudiar y se van a modificar para seguir trabajando en estas cosas que son muy importantes para el país.

El Poder Ejecutivo asume sus compromisos; no envió un proyecto de ley para que fuera aprobado a tapa cerrada, sino que pudimos trabajar en él, discutir y salir adelante. Quienes integramos el gobierno estamos muy agradecidos por los aportes de todas las bancadas y en especial, en este caso, por el esfuerzo realizado por la bancada del Partido Nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede continuar la señora Diputada Argimón.

SEÑORA ARGIMON.— Tal como decía la señora Diputada Rondán, estamos asistiendo a lo que fue, ni más ni menos, el producto de un trabajo de muchas horas en el que, como decía

el señor Diputado Pintado, sin duda todos tratamos de hacer nuestro aporte. Hoy, en este plenario, en la discusión de este artículo, estamos trasladando un aporte que consideramos de mucha importancia respecto de la industria de la construcción, cuyos frutos seguramente podremos ver a la brevedad.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Señor Presidente: por sobre todas las cosas hay que felicitar al Poder Ejecutivo por la iniciativa con relación al fomento del empleo, y en especial, por el artículo 2º.

Quiero destacar el relacionamiento que hubo en la Comisión y el interés mostrado por el Partido Nacional y el Partido Colorado, que se esmeraron mucho en llegar a una solución posible, porque, cuando hablamos de exoneraciones, con seguridad nos estamos refiriendo a una pérdida de ingresos por parte del Estado.

Pero lo más resaltante del artículo 2º es que el Poder Ejecutivo lo podría haber planteado directamente. El Poder Ejecutivo fue generoso en su planteo para que se tratara en el plenario, más allá de lo que se decía en la tarde de ayer sobre las leyes de urgente consideración.

Es destacable la política del gobierno de enfrentar una situación de crisis, un "parate" total de la construcción, que todos hemos visto con nuestros propios ojos y que, en especial, ha golpeado muy fuerte en el interior del país. Todos los Diputados del interior que ocupamos bancas en el Parlamento sabemos con certeza el golpe fuerte que ha representado esta situación. También sabemos lo que esperamos que se logre con estos beneficios impositivos y con la acertada medida del Poder Ejecutivo.

Como decía el señor Diputado Fernández Chaves, los representantes del Foro Batllista en la Comisión fuimos mandatados para tratar un aspecto que no nos convencía, que era el del metraje. Somos gobierno, somos coalición, integramos parte directa del gobierno, pero también pensábamos que había cosas en las que teníamos que ir más allá de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso, la eliminación del metraje fue algo esencial para nosotros, en todo sentido.

Evidentemente, habríamos querido que se mantuviera el 100% de la exoneración y, como

decían los señores Diputados del Partido Nacional, que se la extendiera por un año más. Pero en arduas consultas con el equipo económico sobre lo que significaba esa pérdida de recaudación, nos dijeron que eran de aproximadamente US\$ 7:000.000 al año, lo que no era poca cosa. O sea que acá se está demostrando el esfuerzo del Poder Ejecutivo por abrir la cancha y enviar la iniciativa directamente al Poder Legislativo para que opinara y la mejorara. Entonces, se llegó a la solución de un 75% de exoneración para las obras privadas, porque las públicas están excluidas.

Todos sabemos que en el interior esto tiene mayor fuerza. ¿Por qué tiene mayor fuerza? Porque en el interior no vemos obras muy grandes, ni siquiera de quinientos metros cuadrados. Por eso, era primordial establecer las bases de la exoneración de un 75%, que fue lo máximo a lo que se pudo llegar. Recordarán nuestros compañeros de Comisión que fue uno de los últimos artículos en que llegamos a un acuerdo para votar.

Además, destaco el compromiso directo y fehaciente del Poder Ejecutivo de extender el período de reducción establecido, para lo cual está facultado por este artículo. No se lo estableció por ley directamente porque es una mala señal, en situaciones de crisis, decir a los que han venido pagando rigurosamente y aguantando el chaparrón que se va a estar exonerando de ahora en más, ya que lo que esperamos es que se concreten las promesas del equipo económico en el sentido de que la situación económica, con seguridad, va a mejorar. Cuando se utilizan medidas excepcionales, precisamente por serlo, no se pueden establecer sin límite de tiempo y en forma indeterminada. Pero quédense tranquilos. Si esta situación de "parate" de la construcción sigue, el Poder Ejecutivo está facultado para extender por un año más este beneficio.

Coincido en que se ha hecho el máximo esfuerzo para llevar señales a los empresarios, no sólo en cuanto a la exoneración de aportes, sino también para anunciarles que es el momento oportuno e ideal para que se reactive la economía del país, en especial el sector más multiplicador de la actividad, que es la construcción.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: quiero dejar una constancia previa.

Seguramente se haya debido a un error involuntario, pero en todos los sustitutivos y aditivos que figuran en las hojas presentadas en la Comisión por el Encuentro Progresista-Frente Amplio no aparece la firma del señor Diputado Sendic.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Se está corrigiendo esta omisión a través de la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.— Gracias, señor Presidente.

Tal como se ha señalado, el artículo aprobado es el resultado de un verdadero trabajo de Comisión, más allá de que nosotros presentaremos un sustitutivo, por cuanto otras bancadas nos convencieron de que a través de su presentación en realidad estaríamos estableciendo un criterio de mayor justicia; pero de ello hablaremos inmediatamente.

Nosotros, que no tratamos de excluir a nadie en nuestras conversaciones, hablamos con todas las bancadas y hemos constatado el hecho de que no había ningún argumento que explicara por qué se establecían los mil metros cuadrados de construcción, y no otra cifra, para lograr la exoneración impositiva. No obtuvimos ningún dato científico que demostrara que ése era el metraje indicado para que la disposición multiplicara -aunque no fuera exponencialmente, por lo menos aritmética o geométricamente- los niveles de empleo en la construcción. Nadie supo responder la pregunta de por qué se establecía la cantidad de mil metros cuadrados de construcción.

Fue así que atendimos el llamado de los distintos legisladores no sólo del interior sino también de la capital, porque la mayor cantidad de construcciones menores a mil metros cuadrados también se da en Montevideo, lo que demuestra que esto no es un problema de regiones, sino de una industria fundamental para todo el país.

Hubiéramos querido, además de este artículo, una actitud agresiva desde el punto de vista económico que apuntara al aumento de las inversiones en un sector cuyo impacto sobre el empleo es casi inmediato, no sólo en su actividad central, sino también en la periférica, por todo el trabajo que origina. Además, en virtud de que las características de la mano de obra que necesita el sector quizá requiera un

grado menor de especialización que en otras ramas de actividad, hubiéramos preferido que en el Presupuesto se destinaran mayores recursos a la inversión, fundamentalmente a la construcción, ya que en un ciclo muy recesivo como el que vive nuestra economía tendría un impacto muy favorable sobre el empleo.

Independientemente de esto, y como ya se ha señalado, el artículo fue mejorado y las distintas opiniones fueron escuchadas, pero nosotros fuimos convencidos -no me duelen prendas en reconocerlo- por los argumentos expuestos por la bancada del Partido Nacional -que sabemos comparte el sustitutivo que vamos a presentar, más allá de que no lo vaya a acompañar por otras razones- en el sentido de estimular a aquellos sectores empresariales que hicieron un esfuerzo durante todo este ciclo recesivo para mantener el empleo. De lo contrario, estaríamos llegando a la triste y errónea conclusión de que los empresarios que mantuvieron abiertas las obras dando empleo, están en una condición económica y financiera muy superior a quienes tuvieron que suspenderlas o a quienes, por razones de planificación o de contrato, las iniciarán después de promulgada la ley. Creo que esto sería tremendamente erróneo; en ocasiones, algunos empresarios nacionales, fundamentalmente los pequeños, con esa camiseta celeste que tienen puesta, han mantenido, a pesar de las dificultades económico financieras, el trabajo de mucha gente, aun a pérdida. Esto no sucede sólo en la construcción, sino también en muchos otros sectores de la economía.

Entonces, presentaremos un sustitutivo que es el reflejo de la actitud abierta con que actuamos en la Comisión, dispuestos a escuchar la parte de verdad que las otras bancadas también tienen en el desarrollo de sus pensamientos y sin miedo a reconocer que en algún aspecto nos convencieron, a tal punto de que terminamos expresando en una hoja el espíritu que originalmente era de otros.

He escuchado con mucha atención las palabras de la señora Diputada Rondán. Me parece muy interesante el compromiso del Poder Ejecutivo de estudiar el aporte unificado de la construcción, a condición de que no se elimine este instrumento muy importante para los trabajadores -esto no lo planteó la señora Diputada Rondán, sino que son cuasi precauciones que quisiera plantear en Sala-, porque este aporte unificado resolvió el problema de los trabajadores de la construcción para que

tuvieran aguinaldo, salario vacacional y licencia, lo que en un trabajo tan especial como éste es muy difícil de lograr, ya que los obreros van de una empresa a otra. No obstante, tanto los trabajadores como los empresarios han mostrado su disposición a estudiar el aporte unificado, porque saben que los aportes de la construcción son ciertamente superavitarios y sienten que en cierta medida la construcción está contribuyendo -diría que en forma solidaria- a tratar de que el déficit del Banco de Previsión Social no sea más grande de lo que es actualmente.

De todos modos quisiera sugerir a quienes integran la bancada de gobierno y fundamentalmente a quienes están en más estrecha relación con el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, algo que sería deseable para evitar futuras fricciones: que en la discusión sobre el aporte unificado también participen los empresarios y los trabajadores nucleados en sus organizaciones, porque sabemos que tienen elementos positivos para aportar, que pueden ser de mucha utilidad para que el Poder Ejecutivo resuelva de la mejor manera esta situación que se pretende estudiar.

Era cuanto tenía para decir.

SEÑOR FALERO.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.— Señor Presidente: me tocó participar en la Comisión en el análisis de esta parte del articulado.

La Comisión recibió prácticamente a todos los sectores vinculados con los artículos 1º y 2º, ya sea empresariales o de trabajadores. Todos los Partidos hicieron sus aportes con respecto a este tema y en todos los casos se señalaron discrepancias con respecto a los mil metros cuadrados. Los Diputados del interior, en particular, mostramos la realidad de nuestros departamentos, por cuando no existen obras de esta envergadura, salvo la construcción de algún supermercado o algo por el estilo; el resto, en general, son obras menores.

Quiero señalar, en primer lugar, que finalmente la Comisión decidió -con buen criterio, en la medida en que no existía una razón valedera para mantener lo que en su origen fue el literal B) del artículo 2º- eliminar la superficie mínima para alcanzar una exoneración tributaria. Con esto, la situación de la construcción en el interior no sería distinta a la de Montevideo.

En segundo término, no creo que haya sido

por generosidad que el Poder Ejecutivo envié este artículo dentro del proyecto, sino por necesidad. Además, si el Poder Ejecutivo necesita el instrumento legal correspondiente para aplicar la disminución de los tributos que se pagan en las obras de la construcción, me parece bien que sea el Poder Legislativo el que lo apruebe. Me parece que es de recibo porque es lo correcto, lo normal, lo regular. De todos modos, no creo que valga la pena hacer hincapié en estos aspectos que, a mi juicio, no revisten mayor importancia, porque si realmente se hubiera podido hacer de otra manera, el Poder Ejecutivo habría hecho bien en hacerlo por decreto, dado que el país necesita que algunos temas se solucionen con rapidez, y un decreto tiene un trámite mucho más rápido que un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

En tercer lugar, en la medida en que ha habido, por parte de los promotores, de los trabajadores, de los empresarios y del Banco de Previsión Social, preocupaciones a futuro por este tema, me parece que sería bueno que el asunto se revisara periódicamente, cada vez que se entendiera necesario, por parte del Parlamento. Por lo tanto, vamos a solicitar que se desglose el último inciso de este artículo. No estamos de acuerdo en que el Parlamento carezca de la posibilidad de analizar, no solamente la extensión del plazo, sino alguna otra variable que tenga que ver con este tema en el momento en que sea necesario. Si se desglosa este último inciso, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Parlamento, en el momento en que lo entienda oportuno, la posibilidad de extender el plazo. Nosotros votaríamos todo el artículo, excepto el último inciso.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.— Por su orden, concedo las interrupciones solicitadas por los señores Diputados Acosta y Lara y Lacalle Pou.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Señor Presidente: el señor Diputado Falero ha concurrido en más de una oportunidad a la Comisión y ha seguido de cerca el tratamiento de este

proyecto, y el Nuevo Espacio está en todo su derecho de solicitar el desglose de este inciso. Sin embargo, el tema no es solamente el acuerdo político que se ha logrado a través del compromiso del Poder Ejecutivo. No podíamos en esa instancia, para no dar una mala señal al sector empresarial, que ha venido soportando las importantes crisis que han ocurrido, establecer directamente, a texto expreso, la extensión por un año más. En ese sentido, se llegó a un compromiso por el cual lo único que se está haciendo es facultar al Poder Ejecutivo para extender el período por un año más, no la tasa del 75% ni ningún otro elemento.

Era importante hacer esta aclaración, no tanto para el señor Diputado Falero, que conoce bien el tema, sino para el resto del plenario. Reitero que lo que se está haciendo es facultar al Poder Ejecutivo para la extensión por el período de un año, y no en cuanto a la alícuota del 75%.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.— Señor Presidente: creo que no se ha dicho algo importante sobre este artículo 2º.

Este artículo no genera gastos desde su aprobación en el Parlamento, sino que los genera si, y sólo si, alguien hace uso de esta facultad. En cuanto a que el Poder Ejecutivo lo podría haber establecido por decreto, decimos que nos parece muy bueno que lo haya hecho de esta forma. Por más que algunos hayan dicho que el Parlamento está desprestigiado o que no se le da voz, y que no tenemos las barras llenas, yo creo que es muy positivo que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de un compromiso asumido por el Partido Nacional el 9 de noviembre, lo haya introducido en un texto legal para ser discutido por este Parlamento, que no creemos que esté desprestigiado. Además, no necesitamos un circo para aprobar leyes para la ciudadanía.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede continuar el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.— Señor Presidente: por suerte, las palabras del señor Diputado Lacalle Pou me dan la razón. El Poder Ejecutivo no envió esta iniciativa al Parlamento por generosidad, sino por la necesidad que emana de un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. No lo había querido decir, pero viene

a colación por lo que acaba de expresar el señor Diputado.

Termino solicitando formalmente el desglose del último inciso de este artículo. Me queda claro que el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2001, pudiendo ser extendido por un año más, pero aun en ese caso consideramos que, en mérito a la importancia del tema y a las variables que pueda tener -este asunto también se discutió en la Comisión-, es fundamental que la iniciativa para la extensión de los plazos, si así lo entiende del caso el Poder Ejecutivo, venga al Parlamento y sea éste el que la considere en su oportunidad.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: es exacto lo que manifiesta el señor Diputado Lacalle Pou en cuanto a que el tema de la disminución o el alivio de la carga tributaria figura en el documento acordado con el Partido Nacional. Efectivamente, allí se habla del alivio de la carga tributaria, generando ahorros en el gasto estatal, etcétera, y cuando hace referencia a las exoneraciones específicas de los aportes patronales, lo hace en forma expresa y determinada.

Sin embargo, lo que tenemos que aclarar es que este tema no surge originariamente de este acuerdo. En la página 24 del programa de gobierno de la fórmula Batlle-Hierro, que obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, se expresa que se actuará sobre el sistema impositivo, reduciendo y eliminando en lo posible los impuestos que aún discriminan contra la producción nacional, tales como los aportes patronales. Por lo tanto, aquí no hay ninguna novedad. Se está cumpliendo con el programa que se sometió a votación de la ciudadanía y con el compromiso asumido con el Partido Nacional. Que quede claro.

SEÑOR BLASINA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.— Señor Presidente: creemos no distraer la atención de la Cámara, que está considerando el artículo 2º, correspondiente a la sección relativa al fomento del empleo, si hacemos referencia a algo que tiene una

aplicación más general. Me refiero a la recurrencia, sin solución de continuidad, a las exoneraciones de aportes al Banco de Previsión Social -de aportes patronales, en este caso-, a los efectos de que ello redunde en una mejora del empleo, es decir, en un incentivo para que las respectivas empresas tomen más personal. En algunos casos -los menos- las contrapartidas están probadas. En otros casos -los más- no hay ninguna prueba de que haya habido una contrapartida que justifique las expectativas que se generan cuando se producen estas exoneraciones.

Quería hacer referencia a este aspecto porque nos da la sensación de que se ha perdido el control en cuanto al límite de una política que apuesta casi unilateralmente a la rebaja de aportes patronales al Banco de Previsión Social, como si fuera algo así como el "ábrete, sésamo" para propiciar la reactivación del empleo. La verdad es que este Parlamento, en un momento determinado -que no va a ser en el día de hoy-, tendrá que detenerse a examinar las proyecciones sobre la incidencia que tienen en los déficit del Banco de Previsión Social estas sucesivas exoneraciones, prácticamente como única salida para la reactivación del empleo, con lo cual nuestra fuerza política no está en absoluto de acuerdo, y no lo está ni siquiera con que sea la más importante.

Pero, además, quiero advertir que según datos oficiales surgidos en las últimas jornadas de evaluación efectuadas en el Parlamento sobre la marcha del sistema de seguridad social, desde la aplicación de la Ley Nº 16.713 -es decir, a cuatro años y ocho meses de su vigencia-, el déficit del Banco de Previsión Social se ha seguido incrementando; en la actualidad se sitúa en más de US\$ 1.250.000.000 anuales, si incluimos en él los servicios de retiros militares y policiales. Esta es una situación preocupante.

Insisto: no es nuestro propósito distraer la atención del Parlamento debatiendo este tema en el día de hoy; lo tenemos muy claro. Sin embargo, toda vez que se trata de un capítulo en el que se vuelve sobre lo mismo respecto a cuál sería el mecanismo adecuado para el fomento del empleo, creímos oportuno mencionarlo.

Para finalizar, queremos agregar que cuando se han planteado exoneraciones con las cuales estamos de acuerdo, nunca hemos pedido estimaciones en cuanto a la carga que deberá asumir el Banco de Previsión Social al respecto;

nunca lo hemos pedido. Sin embargo, ya a esta altura del año se han generado contradicciones en el Parlamento porque, cuando se ha pretendido reparar injusticias que afectan a un grupo pequeño de trabajadores, inmediatamente surge el tema de cuánto le costaría al Banco de Previsión Social. Creemos que es una contradicción, y queríamos señalarlo porque no se puede tener tantas aprensiones sobre aspectos que benefician y reparan injusticias a grupos pequeños de trabajadores, y luego seguir distraídamente aplicando exoneraciones. Digo "distraídamente" -con el mayor respeto y sin darle una acepción peyorativa- porque se recurre a ello sin solución de continuidad. Cada vez que se habla del intento de fomentar el empleo, se apuesta a exoneraciones del aporte patronal al Banco de Previsión Social, sin tener en cuenta sus proyecciones y que las estadísticas oficiales ya nos hablan de que sólo se logrará el equilibrio en el período de transición dentro de veinticinco o treinta años, en el mejor de los casos.

Deseábamos realizar estas puntualizaciones. Somos conscientes de que no nos estamos refiriendo específicamente al tema en cuestión, ni siquiera al artículo 2º estrictamente, pero no queríamos dejar pasar la discusión de esta sección relativa al fomento del empleo sin hacer estos comentarios.

SEÑOR ARREGUI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.— Señor Presidente: vamos a realizar una precisión y una solicitud.

No participamos de la Comisión que estudió este proyecto de ley, no obstante lo cual compartimos todo lo expresado aquí por el señor Diputado Pintado con respecto a que esto va a tener consecuencias positivas si se vota en el sentido en que nuestra fuerza política propone, pero serán resultados positivos muy acotados porque, como lo acaba de expresar el señor Diputado Blasina, se opera solamente sobre la variable de los aportes patronales a la seguridad social.

He escuchado con mucha atención los argumentos expresados por los señores Diputados de la coalición de gobierno -del Partido Colorado y del Partido Nacional- y he advertido el convencimiento de la importancia que tiene la reactivación de la construcción para la generación del empleo. Entonces, viendo el

convencimiento de los señores Diputados, me he puesto a pensar que quizás cuando se consideró aquí el proyecto de Presupuesto Nacional, en virtud de la gran cantidad de artículos que contenía, les pudo haber pasado inadvertido que había normas allí incluidas que le quitan US\$ 180:000.000 durante el quinquenio al Fondo Nacional de Vivienda. ¡Y vaya si US\$ 180:000.000 que se quitan al Fondo Nacional de Vivienda podrían haber significado una reactivación de la construcción con la generación inmediata de mano de obra que este sector original!

Por eso, habiendo escuchado las expresiones de convencimiento en ese sentido y en virtud de que el Presupuesto volverá a nuestra Cámara, voy a solicitar a los señores colegas Diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional que en esa oportunidad concreten con sus votos la iniciativa para no quitar US\$ 180:000.000 al Fondo Nacional de Vivienda.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARREGUI.— Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Señor Presidente: no con el ánimo de polemizar, pero quizás sí con el de refrescar el artículo en cuestión al señor Diputado Arregui, quiero decir que aquí se establece expresamente que las obras públicas y las concesiones de obra pública no están incluidas en la exoneración de los aportes. Aquí tratamos de reactivar el sector de la construcción pero privado, evidentemente, que es el que queremos que en estos momentos salga adelante; no porque consideremos que la obra pública no es un elemento importante para dinamizar la economía, sino porque para que ello ocurra deben existir fondos. No es que se nos haya pasado inadvertido, sino que, evidentemente, en materia presupuestal existen recortes y ajustes y el gobierno debe saber de dónde sacar los fondos adecuados para seguir con la política de vivienda.

En ese sentido, recuerdo al señor Diputado que en el gobierno anterior se llevó adelante una política de vivienda muy importante y que pensamos seguir desarrollando en este quinquenio. Pero le recuerdo, porque estamos conside-

rando la segunda ley de urgente consideración, que en esta instancia estamos hablando de la reactivación del sector privado.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede continuar el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.— Señor Presidente: creía que la inquietud del señor Diputado Acosta y Lara apuntaba a generar fuentes de trabajo. Si ése es el objetivo, que se generen a través de las viviendas construidas mediante el Fondo Nacional de Vivienda o de otras obras financiadas por empresarios privados, es lo mismo, salvo que se piense que para la obra pública se trabajará con robots y no con personas. Pero, bueno, la oportunidad se le está pasando y el señor Diputado Acosta y Lara tiene la posibilidad de seguir pensando qué hacer con su voto cuando llegue el Presupuesto.

SEÑOR MOLINELLI.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARREGUI.— Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.— Señor Presidente: el señor Diputado que está haciendo uso de la palabra, muy pícaramente quiere entrar en un tema que es netamente presupuestal.

Debemos decir con claridad que el tema presupuestal significa ingresos y egresos; es un tema muy complejo, que incluye todos los gastos del Estado. Se trata del Presupuesto Nacional; hay ingresos y egresos y se deben medir en forma conjunta. En esta oportunidad estamos hablando de un proyecto de ley de urgente consideración del que se toma un artículo referido a la rebaja de los aportes patronales al Banco de Previsión Social para la construcción, abarcando todo el sector, público y privado. Los objetivos pueden ser los mismos, pero nada tienen que ver con la discusión presupuestal. El análisis del Presupuesto no se debe hacer en forma aislada; no se puede considerar exclusivamente el aumento o la disminución de una partida sin tener en cuenta el Presupuesto globalmente. Esa es la seriedad y profundidad que requiere el tema y eso se ha discutido cuando analizamos el proyecto de ley presupuestal e, indudablemente, lo haremos nuevamente cuando vuelva a la consideración de esta Cámara.

Por lo tanto, no vemos la relación con lo que

expresa el señor Diputado Arregui. Por supuesto que los objetivos de un Presupuesto Nacional también incluyen la creación de empleo, al igual que el proyecto de ley que estamos considerando. Pero no podemos mirar aisladamente un solo gasto u objetivo del Presupuesto Nacional cuando hay que analizarlo globalmente, porque contiene recursos para la Universidad, para la educación y para todos los sectores que están financiados por él. Entonces, no podemos analizar exclusivamente la rebaja o el aumento de una partida sin considerar los demás gastos y presupuestos.

Por los motivos expuestos, consideramos totalmente desatinadas las apreciaciones del señor Diputado Arregui.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Puede continuar el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.— Señor Presidente: evidentemente, en un Presupuesto Nacional hay ingresos y egresos, y eso nos queda muy presente aquí. Lo que quizás no se comprenda es que en un Presupuesto Nacional hay que establecer objetivos y la finalidad que se quiere alcanzar. Esa debe ser la finalidad de los ingresos y egresos que posteriormente se determinan. Si en el Presupuesto Nacional el objetivo de generar puestos de trabajo no ha sido el prioritario, eso es otro tema.

Si el objetivo prioritario es dar trabajo a la gente que no lo tiene, si el objetivo prioritario es ése, tendremos que buscar de dónde proceden los ingresos y no insistir en una política tributaria totalmente injusta como esta en la que persiste la coalición de gobierno, a través de la cual se sacan cada vez más recursos a los que menos poseen mientras, lamentablemente, dicho sistema no alcanza a aquellos sectores privilegiados de nuestra sociedad. Pero, bueno, queda al descubierto entonces cuáles son las distintas filosofías tributarias, si es que, en definitiva, es a ese terreno al que se nos quiere llevar.

Es cuanto queríamos decir y reiteramos la solicitud a los señores Diputados de la coalición de gobierno de que, cuando esta Cámara vuelva a considerar el proyecto de Presupuesto, se entienda que hay una posibilidad más que real de reactivar el sector de la construcción.

SEÑOR SEÑORALE.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.— Señor Presidente: muy brevemente, quiero expresar nuestra esperanza de que este artículo 2º sea una contribución cierta a la reactivación de la industria de la construcción, por ser muy generadora de mano de obra. Tal vez -y sin tal vez-, la industria de la construcción sea la que más rápidamente responde generando trabajo, directo o indirecto.

Como Diputado del interior veo con beneplácito que la Comisión haya recogido la inquietud planteada por nuestra bancada en cuanto a eliminar el condicionamiento de esta exoneración al metraje de las obras. Sabemos que las obras de más de mil metros cuadrados -tal como lo establecía el proyecto del Poder Ejecutivo- son poco probables en el interior del país. Creemos que con la nueva redacción dada por la Comisión este artículo es más equitativo y justo, ya que también las pequeñas y medianas obras son generadoras de fuentes de trabajo. Estas, fundamentalmente, apuestan a una solución habitacional, a hacer realidad aquel sueño tan batllista pero que ha hecho carne en toda la sociedad uruguaya, del techo y la casa propios, y que con firmes políticas apoyadas por el Estado hace que en Uruguay la mayoría de las familias vivan bajo un techo propio.

Pensamos que por sus características, estas pequeñas y medianas obras, que tienen mucho de artesanal, son más generadoras de mano de obra por metro cuadrado, proporcionalmente, que los grandes emprendimientos que, por utilizar tecnología de avanzada, elementos y materiales de última generación, producen menos jornales por cada metro de construcción.

También coincidimos con quienes han expresado que debemos revisar a fondo el tema de los aportes unificados de la construcción, para ver si hay una relación directa entre lo que se aporta y los beneficios que reciben los obreros. Pensamos que éste es un avance que va a contribuir a lo que estamos buscando, es decir, la generación de empleo para todos los uruguayos.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Señor Presidente: me voy a referir a este artículo 2º desde el punto de vista de lo que ha significado para mí: un muy importante trabajo colectivo

desarrollado por las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado.

En ese ámbito de discusión recibimos el Mensaje del Poder Ejecutivo y sentimos que fue importante que se remitiera al Poder Legislativo porque, a la luz de las habilitaciones para generar exoneraciones de aportes patronales que este Parlamento le votó en la primera ley de urgente consideración, quizás el Poder Ejecutivo podría haberlo establecido directamente. Sin embargo, lo puso a consideración del Parlamento y habilitó un diálogo muy fecundo y productivo con el Partido Nacional, ya que ambas bancadas perseguimos un mismo fin: lograr esto que entendemos es un instrumento y una herramienta más entre todas las que se necesitan para revertir la falta de empleo que por estos tiempos nos ha tocado vivir. Se trata de una herramienta más, pero muy importante, sobre todo en esa área y en esta materia de la industria de la construcción. Es una herramienta que pretendimos que se aplicara a todo el país y que tuviera efecto sobre la construcción. De ahí surgió la eliminación de los mil metros cuadrados, que era el requisito para acceder a este beneficio. El manejo de la necesaria prudencia y equilibrio económico en momentos tan difíciles como los actuales implicó que también tuviéramos que adecuar el "quantum" de la exoneración, reduciéndolo de un 100% a un 75%.

Creemos y sentimos que en la tarde de hoy se ha generado, con respecto a este punto, una discusión y un intercambio de ideas que no es fructífero, que no ha sido bueno y que no nos conduce a nada positivo. Nos lleva a echarnos la culpa unos a otros cuando, en realidad, aquí todos perseguimos el mismo objetivo pero sentimos que los caminos son diferentes. Si hay alguien que pretende enrarecer el clima de la discusión, le pido que reflexione, porque no lo va a conseguir. Después de haber trabajado tan arduamente en la Comisión -con la colaboración de los compañeros de todas las bancadas-, donde el Encuentro Progresista-Frente Amplio ha realizado propuestas que hemos hecho nuestras, aun sobre artículos que no votan pero que han tratado de mejorar en una actitud muy constructiva, después de que probamos esa modalidad de trabajo, difícilmente podemos tomar el camino de la confrontación y de la acusación infructífera, que no creo que nos pueda animar a todos.

Con respecto al aporte unificado de la construcción, quiero decir que ese gran avance

se consiguió porque contó con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Bien sabemos lo importante que fue ese instrumento y lo que debemos hacer para conservarlo, para que siga dando sus buenos frutos y permita un desarrollo armónico con el crecimiento de las fuentes de trabajo.

Quería hacer una acotación fundamentalmente con respecto a esas limitaciones que existen en los topes de inversión en materia de construcción y ponerla a consideración de todos los compañeros, ya que a ninguno de nosotros se nos escapa la exigencia de eso. Quiero trasladarles la reflexión que nos hacía el señor Ministro de Economía y Finanzas en ese sentido, cuando se le planteó ese tema en la Comisión, ya que refleja, para nosotros específicamente y con total claridad, lo que es la realidad de esa situación.

Como respuesta a una pregunta formulada por el señor Diputado Sendic, el señor Ministro decía: "La limitación presupuestal -como se imaginarán todos los señores Diputados aquí presentes- no es una cuestión de gusto o de disgusto, de pasión o de indiferencia. Uno intenta tomar las decisiones en función de la disponibilidad de recursos, de las proyecciones del déficit y de las precauciones que hay que tener en materia de endeudamiento.- De modo que el instrumento de obra pública como factor de ocupación es importante; le reconocemos gran trascendencia entre los instrumentos de política económica, pero, obviamente, debemos condicionarlo a la disponibilidad de recaudación y a las posibilidades de déficit y de endeudamiento. Lo haremos mejor o peor; ése es un tema a discutir. No lo hacemos por gusto ni ignoramos la importancia del instrumento".

Por lo tanto, aspiro a retomar el clima de intercambio más fructífero en esta área. Y si podemos encontrar un camino que parta de la base de que todos buscamos el mismo objetivo dejando de lado la línea equivocada de trasladarnos acusaciones, será lo mejor. En ese sentido, quiero asumir que lo que votamos hoy es una apuesta de la coalición de gobierno, que sabe que no es la única herramienta, sino que va enganchada con el cúmulo de herramientas que ha ido conformando desde el inicio del gobierno para mejorar los niveles de empleo y de evolución de la economía en nuestro país. Estamos votando a conciencia de que hemos asumido el riesgo de superar las más diversas y adversas circunstancias que podamos encontrar, pero con el pleno convencimiento de que

lo vamos a lograr; ése es nuestro compromiso. Si el de ustedes es pensar que no lo vamos a hacer, tienen el derecho de decirlo; la historia nos juzgará.

SEÑOR OSTA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OSTA.— Señor Presidente: voy a hacer referencia a ciertas consideraciones realizadas en Sala con respecto a algún tipo de acusación que mencionaba el señor Diputado Gustavo Silveira, en cuanto a que la utilización del instrumento presupuestal no tendría el objetivo de generar fuentes de trabajo. También se decía que, en buena medida, era una forma de dejar en evidencia diferentes posiciones filosóficas -no sé si la cita es textual- sobre cómo encarar esta problemática del desempleo.

Queremos dejar en claro que la administración es el manejo de la tensión entre costos, beneficios, aspiraciones y posibilidades reales. En definitiva, no se puede aseverar que el hecho de no aumentar determinadas partidas presupuestales de gastos con un destino concreto vaya a generar un elemento contradictorio en cuanto a la creación de empleo. Consideramos que lo más importante que debe tener este Presupuesto es el equilibrio necesario a los efectos de que no se desencadene un proceso inflacionario en el país que, en definitiva, repercutiría en la generación del empleo, porque si la economía no crece, aquélla no se produce. La economía crece cuando hay inversión, y ésta viene cuando en un país están dadas las condiciones de estabilidad necesarias.

Queda muy claro -y está bien que así sea- quiénes creen que eso se puede hacer únicamente con el esfuerzo público. ¡Vaya si en estos últimos años que precedieron a la crisis, el Partido Colorado, el Foro Batllista y el gobierno encabezado por el doctor Sanguinetti han hecho esfuerzos para generar empleo a través de la inversión pública! Y, efectivamente, ello sucedió. En 1998 la desocupación en el sector de la construcción era del 6.8%, bastante por debajo de la media. Por supuesto, ahora es mayor, como consecuencia de todos los acontecimientos internacionales que incidieron en la situación de nuestro país.

Entonces, no se puede decir alegremente que no vamos a votar una partida presupuestal porque nuestra intención no es generar empleo. Debemos actuar con responsabilidad y saber

que el Presupuesto es una herramienta. Si mañana se produce un déficit importante que repercuta en la inversión y en la estabilidad -el logro más importante de este país a partir de 1998, cuando la inflación llegó a un dígito-, estaremos comprometiendo la posibilidad de desarrollo y de trabajo del Uruguay. Debemos manejar otros números.

Está bien que haya quienes creen que el tema del empleo pasa solamente por el emprendimiento del Estado, pero nosotros pensamos que no. La cantidad de personas que trabajan en el sector público ha bajado del 24% al 18%; sin embargo, entre 1996 y 1998 el país logró generar ochenta y seis mil puestos de trabajo a impulsos del sector privado, que necesita y exige -con razón- condiciones de juego claras para poder llevar adelante la inversión.

Obviamente, al aumentar la cantidad de personas que buscan trabajo, ello se ha reflejado en importantes cifras de desempleo. Está bien lo que decía ayer el señor Ministro de Economía y Finanzas: si se espera que la economía crezca un 2% en un momento de crisis, eso generará nuevos puestos de trabajo. Esta es la dinámica que debemos dar al tema del empleo; creemos que lo estamos haciendo con este tipo de iniciativa.

Buscamos alguna clase de exoneración para fomentar la inversión en el sector, pero no es posible particularizar. Estamos analizando un punto concreto como es la exoneración de aportes en un sector; hagámoslo en forma seria. Si queremos entrar al debate genérico en cuanto a cómo repercute o a la forma de encarar la política de generación de empleo en el país, bienvenido sea. Pero no podemos generar un déficit incontrolable; sabemos que en situaciones de crisis aparecen voces un tanto ortodoxas diciendo que la medida es cerrar el país, proteger la producción local y aumentar la inversión pública como única forma de que eso se lleve adelante. Nosotros creemos que ése no es el camino, sino que se deben generar las condiciones para que el país crezca económicamente porque, reitero, la desocupación baja si el país crece. Precisamente, cuando el país tuvo niveles de crecimiento del 5% anual, la relación se mantuvo. Si ése es el camino, ¿por qué apartarnos? ¿Por qué tomar la postura facilista, a corto plazo, a veces demagógica, de pararse y decir que este modelo fracasó? No es así; este modelo está vigente. Fue instrumentado hace algunos años y ha tenido éxito en la

medida en que los elementos internacionales no estuvieran en su contra.

Como soy afecto a leer libros que, de pronto, a algunos no les gustan, voy a citar algo que decía Sartori, que a mi entender es importante: "La 'democracia en déficit' que no logra controlar el gasto y que se deja atrapar en el círculo vicioso de la deuda-inflación es, sin más, una democracia afligida por una mala política. Afirmarlo no es ideología; sin embargo, sí lo es negarlo".

SEÑOR ARREGUI.— Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.— Señor Presidente: los hechos están a la vista. Al Fondo Nacional de Vivienda se le quitan US\$ 180:000.000 en el período. Los Diputados integrantes de la coalición de gobierno han expresado muy claramente -nosotros lo compartimos- que la construcción genera inmediatamente ocupación y puestos de trabajo.

Asimismo, estamos de acuerdo con lo expresado por el señor Diputado Osta -de alguna manera, también intentaba señalarlo el señor Diputado Gustavo Silveira- en cuanto a la importancia de que no haya déficit. Ello es fundamental. Esta fuerza política está dispuesta a financiar este tipo de medidas; busquemos que tributen -como corresponde- aquellos sectores que de alguna manera se han visto privilegiados en el seno de la sociedad, para que haya una solidaridad real, y el déficit a que hacía referencia el señor Diputado Osta no va a existir. Le digo que considero importante el tema de la democracia, y quiero resaltar que no se trata solamente de la democracia política, sino también de la social y económica, porque sin estos dos aspectos, la democracia no está totalmente realizada.

SEÑOR OSTA.— Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OSTA.— Señor Presidente: no quiero entrar en temas que no se relacionan con el artículo que se está considerando y pido disculpas si se dilata la discusión, pero parece un poco complicado que a los batllistas nos vengan a explicar el sentido social de la

democracia cuando, en definitiva, la fuerza política que representa quien me antecedió en el uso de la palabra lo combatió toda su vida. A nosotros no nos van a venir a explicar que la única forma de llevar adelante una política social efectiva, que dé réditos y fondos al Estado para poder desarrollarla, es tener niveles macroeconómicos estables, presupuestos bien administrados y déficit fiscales controlados. Para ello, creo que están sugiriendo la aplicación del impuesto a la renta; está bien, es una forma de tributar, pero la población del país le ha dado la espalda.

Consideramos que el camino que debemos transitar es dejar de lado aspectos demagógicos puntuales y analizar las cosas con seriedad, en sus debidos términos y en forma general, sabiendo que para repartir hay que generar y que para ello debemos mantener el equilibrio necesario para que no se vuelva a producir el proceso inflacionario, que pagan los más pobres. Cuando la inflación baja del 45% al 5% el Estado deja de recaudar US\$ 330:000.000, pero, en definitiva, estamos dando a la gente capacidad para poder consumir y vivir mejor. De esa manera, también se genera el empleo.

(Interrupción del señor Representante Falero.-
Respuesta del orador)

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Señor Diputado Osta: por favor redondee su intervención.

SEÑOR OSTA.— Señor Presidente: no traje tranquilizantes; sugiero que si alguien los tiene, se los suministre. Yo deseo terminar con este punto.

Quiero terminar con esta idea, porque si aquí se está planteando el tema de fondo, que es la generación de empleo, pensamos que se crea a partir del mantenimiento de un gasto absolutamente razonable. Si en este caso damos un aliciente para los aportes de un sector es porque creemos que es importante, y si estamos contestando es porque no deseamos que nos emplacen y nos digan que no queremos generar empleos a través de la utilización de un elemento presupuestal. ¡Ni hablar de otras insinuaciones devaluatorias realizadas en el día de ayer, que si se repiten espero poder contestarlas, aunque no hoy!

SEÑOR FALERO.— Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.— Señor Presidente: ¿qué propósito tiene analizar este asunto en profundidad con los plazos que tenemos?

Si el señor Diputado Osta y la bancada del Foro Batllista quieren que discutamos en profundidad durante años y años, no tengo ningún inconveniente en pedir la palabra cuando se esté considerando cada uno de los artículos y hablar el tiempo que corresponde. Puedo asegurar que con ese procedimiento este proyecto de ley no se aprueba en los plazos establecidos.

En definitiva, el partido de gobierno tendrá que decidir cuál será el procedimiento. Trabajemos con responsabilidad. Si realizan enormes discursos, cuando desee hacer uno, no se podrá impedir porque estoy en condiciones de hacerlo durante media hora en la consideración de cada uno de los artículos. ¡Ustedes eligen!

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: para ser fieles al compromiso de aprobar esta iniciativa con cierta normalidad y no ser cómplices de prácticas dilatorias, solicito el desglose del inciso primero del artículo 2º, que es el que para nosotros se contrapone con el sustitutivo que figura en la Hoja Nº 1.

Por lo tanto, el procedimiento que proponemos es desglosar solamente el inciso primero del artículo 2º para votarlo enfrentado con el sustitutivo, por decirlo de alguna forma.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Hay un pedido del señor Diputado Falero de desglosar todo el artículo.

Por lo tanto, vamos a votar el artículo 2º por incisos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 2º.

(Se vota)

— Cuarenta y cuatro en ochenta y dos: **Afirmativa.**

SEÑOR PINTADO.— ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

— Ochenta y tres en ochenta y cinco: **Afirmativa.**

Se va a votar el inciso segundo del artículo 2º.

(Se vota)

— Cuarenta y siete en ochenta y cinco: **Afirmativa.**

Se va a votar el inciso tercero del artículo 2º.

(Se vota)

— Cuarenta y cuatro en ochenta y seis: **Afirmativa.**

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Artículo 3º.— La tasa de aportes del Banco de Previsión Social (BPS) de las empresas unipersonales que se registren a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, cuyo titular tuviera una edad entre dieciocho y veintinueve años se reduce en el porcentaje correspondiente al componente de aporte patronal jubilatorio del titular de la misma, hasta el 31 de diciembre de 2001".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Cuarenta y ocho en ochenta y ocho: **Afirmativa.**

SEÑORA BENTANCOR.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.— Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo porque, más allá de las intenciones que pueda tener el legislador de fomentar la pequeña y la mediana empresa -como se ha expresado aquí-, con lo que estaríamos de acuerdo, no acompañamos la propuesta relativa a las empresas unipersonales.

Lamentablemente, de un tiempo a esta parte se ha generado en el país una situación de avasallamiento de los derechos de miles de

trabajadores a quienes las patronales los colocan ante una disyuntiva de hierro: se transforman en empresas unipersonales o son despedidos.

Si la intención de los señores Diputados que apoyan esta iniciativa -que no estamos calificando- es promover y fomentar la empresa unipersonal y las pequeñas y medianas empresas, el artículo debería establecerlo nítidamente e indicar cierto tope, pues así se acotaría esa situación que, reitero, se da en forma permanente al impulsar a los trabajadores a que se conviertan en empresas unipersonales, perdiendo los derechos que tienen como dependientes.

Es cuanto queríamos decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

"Artículo 4º.— Redúcese la tasa de aporte patronal rural dispuesta en el inciso primero del artículo 686 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, en un 0.3870/oo (cero con trescientos ochenta y siete por mil), por el período 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001. La reducción antes mencionada refiere exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios a la contribución patronal rural global".

— En discusión.

SEÑOR BARRIOS.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.— Señor Presidente: sin duda alguna, la falta de trabajo es la más grave manifestación del modelo económico que se viene aplicando en el país. Además, es el asunto que más sensibiliza a todos.

Seguramente por estos motivos, la primera ley de urgente consideración y este proyecto que estamos tratando han comenzado su articulado con capítulos referidos al fomento del empleo.

En la primera ley de urgente consideración, con un pomposo título de fomento de la inversión y el empleo, la referencia se limitaba a dos artículos; con uno de ellos se convertía en ley una exoneración que desde hace años se venía aplicando sin resultados y, a través del

otro, se facultaba al Poder Ejecutivo a generar nuevas exoneraciones, lo cual, de acuerdo con nuestras informaciones, hasta ahora no ha sido utilizado.

Esto significa que el fomento de la inversión y del empleo a través de esa ley, después de haber transcurrido meses de su aprobación, ha quedado en el título.

Con este proyecto de ley convocamos nuevamente el fomento del empleo para su carátula, pero siempre aplicando el mismo mecanismo: la exoneración de aportes. Me pregunto -creo que todos debemos hacerlo- si no estaremos exonerando de aportes a empleos inexistentes, que se fueron destruyendo durante mucho tiempo a través de la apertura indiscriminada y de un mecanismo que se ha aplicado durante estos años y que se ha dado en llamar atraso cambiario, que prácticamente supone una detracción a las exportaciones y un subsidio a las importaciones. Acabamos de aprobar un artículo -nuestra fuerza política acompañó una parte- en el que se establece una exoneración a las construcciones. Para votarlo hicimos cuestión de que esa exoneración cubriese no sólo las construcciones de más de mil metros cuadrados, sino también las menores. El hecho de que este beneficio abarcara sólo a las construcciones mayores de mil metros cuadrados nos hacía suponer que esta exoneración estaba destinada a muy pocos casos.

Se habló mucho de la importancia que tiene este artículo y no niego que la tenga, pero como estamos hablando de exoneraciones y continuaremos haciéndolo quisiera recordar algo que no se mencionó en Sala: las expresiones que con respecto a esa norma tuvieron los representantes del sector privado, al cual está destinado, precisamente, este artículo que acabamos de aprobar. Con respecto a la eficacia de esta norma el Presidente de la Cámara de Industrias, ingeniero Otegui, muy honestamente dijo que con esta exoneración sólo se generaba un 3% de disminución en los costos -ahora será del orden del 2%- y que ese porcentaje no decidía ninguna inversión: a lo sumo aceleraría alguna que ya estuviera en carpeta.

Los representantes de la Asociación de Promotores Privados dijeron que no les servía de ninguna manera esta norma y, por lo tanto, no tenía sentido aprobarla. Entonces, debemos colocar las cosas en su verdadero lugar y no generar falsas expectativas. De todos modos, sabemos que algún resultado tendrá, aunque sea muy menor, y por ello la hemos acompañado.

Con respecto al artículo 4º, queremos dejar muy claro que no correspondería que estuviese contemplado bajo el rubro de "Fomento del empleo". El mencionado artículo refiere a la extensión de una exoneración establecida en la primera ley de urgente consideración para el sector agropecuario. Las explotaciones rurales tributan de acuerdo con el área de los predios y no en función del personal ocupado. Por lo tanto, tributen más o tributen menos, no van a generar mayor o menor empleo. Podrán generar más empleo si tienen condiciones de competitividad y, seguramente, por esta vía no le estamos dando esa posibilidad.

No han sido los altos aportes al Banco de Previsión Social los que llevaron a todo el sector agropecuario a la aguda crisis que hoy está viviendo. Tampoco fue consecuencia de los precios del sector ganadero, porque salvo ahora que está pesando el efecto de la aftosa, los precios del sector ganadero eran buenos en los últimos tiempos, aunque no pueda decirse lo mismo respecto al sector agrícola. En definitiva, lo que ha llevado a la crisis al sector rural, como a la industria manufacturera y al sector turismo, es la tremenda transferencia de recursos, fundamentalmente hacia el sector financiero y hacia el exterior, a través de las importaciones subsidiadas mediante el atraso cambiario, generándose en el sector rural pérdidas que no se puede pretender hoy que sean resarcidas por el Estado, debido a su volumen. Además, lamentablemente ese dinero se fue del país a través de las ganancias del sector financiero y del subsidio a las importaciones, como recién mencionábamos. Todo esto condujo a la crisis, así como las políticas fiscales que se han mantenido, por ejemplo en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. Mientras aquí decimos y publicitamos que estamos fomentando el empleo mediante la rebaja de un 2% en los aportes patronales de la construcción, o mediante la rebaja de un 0.370/00 en los aportes patronales del sector rural, enancándose en la suba del petróleo se aprovecharon a favor de la caja del gobierno esos factores externos que todos los días sirven para justificar que no se recupera el país. Una cosa es que no se puedan manejar los factores externos y otra es que éstos sirvan para que el Ministerio de Economía y Finanzas se asocie a ellos y suba los impuestos al combustible, aprovechando la suba del petróleo.

En seis meses, el impuesto a los combustibles, que sin ninguna duda afecta mucho más

la competitividad de los sectores productivos que los aportes patronales al Banco de Previsión Social de la actividad rural, subió un 55%. Asociándose con la suba del petróleo, se subió un 55% el combustible, en épocas en que nos jactamos de que la inflación es del 5% anual. Lamentablemente, cuando baje el petróleo la actividad productiva no va a poder beneficiarse totalmente de esa rebaja, porque a través de una medida presupuestal se completó la jugada y ahora que ha subido un 55% y el precio está bien alto, queda fijo el IMESI para los combustibles y no puede bajar más.

Entonces, se trata de clarificar: si queremos realmente dar competitividad a los sectores productivos, hay que tener en cuenta otros factores y no estas exoneraciones. No obstante, entendemos que para una parte de los productores estas exoneraciones pueden resultar una ayuda, sobre todo para los productores menores. Es por ello que hemos propuesto sustitutivos de los artículos 4º y 5º. Cuando se plantearon en Comisión, se recibieron manifestaciones en el sentido de que, analizados con tiempo, podrían ser incorporados. Por la razonabilidad, la justicia y la ventaja fiscal que implican estas propuestas, tenemos la esperanza de que sean asumidas por esta Cámara.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

— En el sustitutivo del artículo 4º proponemos limitar la reducción de aportes a los predios de hasta 2.500 hectáreas CONEAT 100, que no son en absoluto chicos, puesto que en muchas partes del país representan 4.000 ó 5.000 hectáreas. Pero esos predios equivalen al 98% de los productores, o sea que sólo quedaría fuera de la exoneración un 2% de ellos y bajaríamos el costo de esta medida en un 30%, ya que el área sería un 30% menos.

El sustitutivo del artículo 5º -que me permito plantearlo aquí, en forma integral con el sustitutivo anterior- hace extensivo hasta las 500 hectáreas el beneficio de la exoneración que en la primera ley de urgente consideración se había fijado para los productores que tuvieran hasta 100 hectáreas. El costo de ese beneficio es menor que la reducción que se plantea por la aplicación del primer sustitutivo. Con ello lograríamos varias cosas. En primer lugar, mejoraríamos el beneficio que se da por estas normas al 85% de los productores. En segundo término, mantendríamos el beneficio que ya tenía el 12% o el 13% de los productores y sólo quedaría excluido un 2%, que serían grandes áreas, muchas de

ellas dedicadas a actividades que ya están subsidiadas, como la forestación, y que además son las que ocupan menos mano de obra.

Por otra parte, en este caso suavizaríamos en algo la orientación que ha tenido la política tributaria en los últimos años hacia el sector agropecuario, que ha consistido en bajar el costo de los aportes para las grandes áreas.

En los últimos cinco años, a los productores con más de 10.000 hectáreas se les redujeron los aportes en un 75% y a los que tienen menores áreas, en un 33%; mientras tanto, el aporte de los trabajadores se incrementó en un 70%, casi el mismo porcentaje en que se redujo la contribución de las grandes áreas. Nos parece que esa orientación no es la correcta.

Entre las orientaciones que consideramos no aptas para fomentar el empleo en el sector rural nos faltó mencionar que mientras se baja el aporte de las grandes áreas, mediante la aplicación del IMEBA se incrementaba el de los sectores intensivos, o sea, aquellos que más mano de obra ocupan.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Trate de ir redondeando su pensamiento, señor Diputado; su tiempo expiró hace tres minutos.

Puede continuar el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.— Señor Presidente: sólo quería dejar sentada la necesidad de que no se continúe con esta política por la que las mayores áreas cada vez tributan menos y las áreas menores, que son las más productivas y las que más mano de obra ocupan, tributan cada vez más, como también ocurre con los trabajadores.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).— Señor Presidente: voy a referirme a una cuestión reglamentaria.

He hablado con otros señores Diputados y somos varios los que estamos comprendidos en lo que establece el literal M) del artículo 104 del Reglamento, pues somos productores rurales. Por ello queremos hacer ante la Cámara la declaración que requiere esa disposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Esa disposición rige para usted, señor Diputado, pero no sé a qué otros señores Representantes comprende.

El señor Diputado Julio Silveira ha tenido la

delicadeza de informar que como es productor rural está comprendido en esta disposición reglamentaria, que obliga a declarar ante la Cámara "toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere".

SEÑOR BARRIOS.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.— Señor Presidente: es perfecta la acotación del señor Diputado Julio Silveira.

Debo aclarar que actualmente no soy productor rural, pero estoy muy involucrado en el sector arrocero por años de trabajo y porque he ocupado lugares de dirección en ese ámbito. Además, tengo dos hijos que son productores de arroz y explotan cien hectáreas cada uno.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Queda aclarado el punto.

SEÑOR PINTADO.— ¿Me permite, señor Presidente?

Hay un sustitutivo del artículo 4º que figura en la Hoja Nº 2.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— En efecto, señor Diputado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota)

— Cuarenta y cuatro en ochenta y dos: **Afirmativa.**

Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

"Artículo 5º.— Prorrógase, por el período 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, la exoneración de la aportación patronal rural sobre dependientes y sobre el titular y su cónyuge colaborador prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Cuarenta y ocho en ochenta y cinco:
Afirmativa.

SEÑOR BARRIOS.— ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

— Ochenta y cuatro en ochenta y cinco:
Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

"Artículo 6º.— Extiéndase la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 5º de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, con los alcances necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4º y 5º de la presente ley".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Ochenta y cuatro en ochenta y cinco:
Afirmativa.

Hay varios aditivos a la Sección I, que figuran en las Hojas Nos. 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque no es demasiado reglamentario, el Encuentro Progresista-Frente Amplio ha solicitado que estos aditivos sean considerados como un paquete. Como estamos al término de la sección, entiendo que sería el momento de considerarlos.

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: a efectos de contribuir con el desarrollo de la sesión planteamos que se haga una excepción y se argumente en bloque sobre los aditivos de esta sección, aunque se voten uno por uno.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: estuvimos esperando el momento para fundamentar nuestro voto sobre toda la sección y escuchando la discusión no podíamos menos que reflexionar sobre lo difícil que es gobernar. Cuando se votan impuestos se reciben críticas; cuando no se tocan impuestos se reciben críticas; cuando se bajan impuestos o tributaciones, también se reciben críticas.

Aquí se ha hecho un gran esfuerzo por parte de quienes creemos que bajar la tributación sobre el trabajo favorece y fomenta el empleo. Ese es el tema que tiene que quedar bien claro: hay personas que piensan que esto no es así y otros que creemos lo contrario y sostenemos que son válidos los argumentos relacionados con el impacto que esta medida pueda tener en el Banco de Previsión Social. En oportunidad de que se considere nuevamente el proyecto de Presupuesto podremos analizar el hecho de que las transferencias financieras a la seguridad social de 2000 a 2004 van a bajar un 16%, y veremos que ése no es un argumento para no votar esta rebaja.

Cuando se argumenta que la exoneración es insuficiente, no se está considerando todo el panorama general de recursos, ingresos y egresos del Estado. ¡Ojalá el gobierno pudiera dar mucho más! Cuando alguien se pregunta: "¿Cuántos empleos se van a generar con estas medidas?", quienes votamos afirmativamente estas disposiciones pensamos: "Si salvamos un solo empleo, si logramos dar una pequeña ayuda para fomentar un solo empleo, eso justifica votar esta sección".

(¡Muy bien!)

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: hay una clave del debate que no logro entender. De pronto no seguí las exposiciones con mucha atención, pero no he escuchado que la rebaja de aportes al Banco de Previsión Social -más allá de las precauciones que se han indicado debido a la situación del banco- no sea un factor que contribuya al aumento del empleo. Es un factor cuyo efecto resulta imposible de medir aunque, como se ha señalado, podría evaluarse más por el aumento del desempleo que "evitaría" -entre comillas- que por la ocupación

de mano de obra que pudiera generar.

El debate se ha centrado en que la mera utilización de esta variable no constituye una política integral, activa y sectorial de generación de empleo. Desde nuestro punto de vista, esta variable debe ir acompañada de un conjunto de medidas; no digo que quienes plantean otro camino no quieran que el empleo mejore y que los índices de desempleo se reduzcan al mínimo -si se pudiera, a un dígito-, pues cualquiera estarían interesado en mostrar que su política económica es exitosa. Lo que nosotros decimos es que, lamentablemente, los instrumentos que se están utilizando no conducen a ese efecto.

Como se señalaba, es cierto que hay que cuidar el déficit. Pero ¿qué es un déficit? Es el resultado de que los egresos son más que los ingresos. Pero no hay ninguna receta económica que diga que los ingresos deben obtenerse de una sola manera y que los egresos han de destinarse de tal forma. Nosotros tenemos una idea distinta sobre cómo procurar los ingresos y cómo manejar los egresos para que la economía en su conjunto, no sólo no tenga déficit, sino que permita que se redistribuyan mejor los frutos de la riqueza que generan todos los uruguayos, y no algunos.

(Interrupciones)

— No es cierta la hipótesis -no está demostrada; a veces se da, otras no- de que a mayores niveles de crecimiento, más trabajo. Es mucho menos cierto que a mayor riqueza, haya mejor distribución de ésta. Las políticas que el Estado genera son las que motivan que los niveles de riqueza vayan en un sentido redistributivo o en un sentido acumulativo.

(Interrupciones)

— Cuando el Estado prescinde de participar en la orientación de la distribución de la riqueza que el país genera, se producen fenómenos de acumulación estrepitosa que originan los problemas sociales que estamos viviendo actualmente -exclusión, marginación, etcétera-, los que no sólo ocurren en Uruguay, sino en todo el mundo. Quizá el mundo -no sólo nuestro país- deba pensar cómo se soluciona esta situación; ésa es la reflexión que hoy están llevando adelante el propio Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Interamericano de Desarrollo, porque advierten que se trata de un problema para la convivencia y la supervivencia de los mercados y del libre mercado al que se quiere proteger.

Por estas razones, hemos votado en segunda instancia los artículos que aquí se proponían.

No he podido otorgar las interrupciones que se me solicitaron porque ello no se puede hacer durante el fundamento de voto.

SEÑOR BRUM.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BRUM.— Señor Presidente: no voy a discutir sobre lo que es un déficit con el señor Diputado preopinante, debido a que ellos tienen una gran experiencia en esa materia.

Lo que sí quiero transmitir es que, obviamente, cuando se toman decisiones de estas características, en el fondo se está buscando abaratar los principales precios. En definitiva, aquí se está bajando el costo del metro cuadrado de construcción; eso ya ha ocasionado, por lo menos, un nuevo empuje, según escuchamos en las noticias, de futuros emprendimientos. Esto tiene que ver con la generación de puestos de trabajo en nuestro país.

En el día de ayer se preguntaba si se tenía alguna intuición de lo que significan este tipo de ventajas que proporciona el Estado. Precisamente, anoche, cuando la sesión de la Cámara pasó a intermedio, me conecté con el Ministerio de Turismo que tiene un buen ejemplo de exoneración tributaria en complejos turísticos. Y la evaluación, desde que fue aprobado ese decreto, es casi de US\$ 1.000.000.000 de inversión y los que hemos estado colateralmente vinculados a la industria de la construcción sabemos que aquel monto de inversión genera alrededor del 50% en mano de obra.

Se trata de edificios que no sólo generan inversión en su proceso constructivo sino, sustantivamente, en el correr del tiempo. Esa exoneración tributaria, que es bastante interesante -y que realmente se está reviendo para potenciar al sector-, ha tenido un impacto brutal no sólo en lo que respecta a los edificios construidos en las zonas que se podría pensar como razonables, como el este o Montevideo, sino que ha abarcado a todo el país. Los señores Diputados del interior saben muy bien que ese tipo de exoneraciones tributarias son muy importantes para el fomento de la inversión en el Uruguay.

¿Cómo se va a evaluar todo esto? El tiempo lo dirá; pero téngase claro que la rebaja del

costo del metro cuadrado de construcción constituye, sin duda, un elemento muy fuerte para lograr inversiones a largo plazo, originando un fuerte componente de mano de obra, lo que se traduce en la generación de empleo, no sólo en el proceso de construcción sino, posteriormente, en el uso de esos edificios.

SEÑOR OSTA.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OSTA.— Señor Presidente: votamos esta iniciativa convencidos de que el efecto va a ser positivo en cuanto a la generación de empleo en un sector en el que, según los datos, rápidamente se toma este tipo de iniciativas en forma positiva y se generan empleos.

El país ha dado muestras claras en cuanto al crecimiento necesario de la economía a los efectos de que se genere empleo y de que se distribuya de mejor manera la riqueza. Uruguay ha mostrado claramente que cuando creció en materia económica logró generar mayor cantidad de empleo. Las cifras de crecimiento del año 1998 eran de 3.5% anual y el desempleo estaba por debajo del 10%. Insistimos en que los efectos externos incidieron sobre el país, atenuando el crecimiento económico y conduciendo a que creciera el nivel de desempleo.

En cuanto al manejo de los déficit, hay que tener en cuenta que es importante mantener la estabilidad de un país que trata de que no vuelva el flagelo de la inflación, que atenta contra los más humildes. Por otro lado, el manejo del déficit y de las cuentas públicas en forma correcta ha evitado al país, a partir de la obtención del grado inversor, pagar US\$ 58:000.000 más que otros países por punto de interés; a la vez, esto lo ha protegido de no tener que salir a negociar créditos a nivel internacional en condiciones desventajosas.

Evidentemente, tenemos diferentes conceptos de lo que es manejar un déficit según el nivel en que nos toque gobernar. Nosotros mostramos las consecuencias que ha tenido sobre nuestro país este tipo de efectos que otros creen que pueden manejar, no sabemos cómo. En verdad, ha sido terrible lo que han demostrado quienes hablan de ello, en cuanto al manejo de cuentas -sin factores externos-, cuando les toca gobernar, generando un déficit absolutamente incontrolable.

Votamos esta disposición sabiendo y siendo

conscientes de que hay mucha gente que ha perdido su trabajo; sabemos y votamos conscientes de que hay mucha gente que a determinada altura de la vida se le complica la inserción en el mercado de trabajo; también sabemos de las personas que tienen una situación de subempleo y que el salario no les alcanza. Pero el camino que necesita el país para salir adelante, pasa por crecer económicamente a fin de distribuir mejor, tal como Uruguay lo ha demostrado en los últimos años, a partir de los gobiernos que antecedieron al actual. Este gobierno también llevará adelante esa idea, no con políticas ortodoxas -que ya no existen-, que han demostrado que a lo único que condujeron es al hambre de la gente que las ha padecido.

SEÑOR SENDIC.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SENDIC.— Señor Presidente: comprendo lo que plantea el señor Diputado Ronald País: es difícil gobernar y nosotros somos un poco "criticones"; pero varias veces hemos planteado que apoyamos algunas de estas medidas porque las consideramos positivas, aunque en general entendemos que son insuficientes.

En el día de ayer nuestra bancada presentó una serie de propuestas -también lo hicimos en la Comisión, y lo hemos discutido- con espíritu constructivo. Inclusive, personalmente expresé que no somos de los que creen que cuanto peor le vaya al gobierno, mejor, porque hay mucha gente que atrás de esta situación pasa muy mal.

No hemos apoyado algunas de las propuestas que se han hecho porque consideramos que no surtirán el efecto deseado, aunque el gobierno las haya presentado con buena intención.

En relación con los déficit, aconsejo al señor Diputado que leyó un párrafo de un libro que haga fotocopias y las distribuya entre el equipo económico del gobierno anterior, que nos dejó un terrible déficit fiscal.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: he votado negativamente esta sección, por los

argumentos que expusieron mis compañeros.

Ahora bien, centrémonos en que teníamos algún compromiso para terminar la discusión a determinada hora. Si se quiere discutir sobre el déficit, hacemos maravillas; antes que nada, porque hay gobiernos que nunca dijeron a su población que no iban a tener déficit y hay gobiernos que durante la campaña electoral dijeron a su población que quienes decíamos que había niveles de déficit estábamos mintiendo. Entonces, juguemos a divertirnos; ya que gastamos algunos minutos, usemos algunos más para hacerlo divertido.

¿Queremos comparar déficit? Comparemos déficit. ¿Calculamos déficit sobre presupuesto? Calculemos déficit sobre presupuesto. El Gobierno Departamental de mi Partido tuvo un déficit sobre el presupuesto anual del orden del 8.8%, es decir, US\$ 30:000.000 sobre US\$ 330:000.000. Está presentado; fue auditado y el Tribunal de Cuentas se expresó. Bien; veamos el déficit del Presupuesto Nacional sobre el Presupuesto Nacional. En el caso del anterior gobierno, fue del 17.5%; representa -me acota el señor Diputado Ponce de León- más del doble del déficit departamental. Tenemos las cifras en nuestro poder y podemos discutir las.

Hagamos el "divertimento" sobre el PBI. Este cálculo nos diría que aquellos que hacen tanto problema por el déficit, en realidad, a nivel nacional, en términos de PBI nacional, tuvieron el 4% de déficit. En términos de PBI departamental, que es el 60% del Presupuesto Nacional, el déficit es de 0.2%; o sea, de 20/oo.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Michelini)

— Si se quiere discutir acerca del déficit en relación con esta sección, lo haremos, con una diferencia: hay un gobierno que nunca ocultó sus cifras sobre déficit y hay otro gobierno que lo negó en el marco de la campaña electoral, lo presentó después y tuvo que venir a justificarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Léase el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 3, presentado por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella, Pintado y Michelini.

(Se lee:)

"Artículo.— Créase con destino al Fondo

de Reconversión Laboral un gravamen adicional del 5% al previsto por el artículo 3 literal e) de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, en la redacción dada por vía de interpretación autenticada por la Ley Nº 16.405, de 17 de agosto de 1993 y que gravará únicamente los aciertos de los denominados "Pozo de Oro", "Pozo de plata" y "Pozo revancha", correspondientes a la modalidad de juego denominada "5 de Oro", creada por Decreto 635/89, de 28 de diciembre de 1989.

Dichos recursos serán administrados por la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), la cual los afectará a los cometidos asignados por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1999.

Los fondos afectados deberán ser depositados mensualmente en la cuenta que a tales efectos la Junta Nacional de Empleo tiene en el Banco Hipotecario del Uruguay o la que se pudiera instrumentar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley Nº 16.320, en la redacción dada por el artículo 422, inciso 2 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

— En discusión.

SEÑOR BENTANCOR.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.— Señor Presidente: por economía de tiempo, solicitamos hacer una fundamentación de carácter general y, por lo tanto, no seguiremos el orden establecido para los aditivos.

Quiero hacer una precisión personal, pero que creo representa al conjunto de mi fuerza política. No ofenderemos a ninguno de los colegas legisladores planteando a la población que ellos no tienen sensibilidad ante el desempleo y que no creen sanamente que, a través del instrumento que están aplicando, se pueda mejorar esa situación. Sí hemos mencionado y queremos repetirlo en la sesión de hoy que, aun siendo un instrumento válido y, de alguna forma, favorecedor, no es suficiente y debería integrarse a una batería más amplia de instrumentos, parte de la cual hemos querido incorporar a los aditivos que rápidamente pasamos a enumerar.

En primer lugar, creemos que al plantear la exoneración de los aportes patronales a la seguridad social también se debería poner a consideración del plenario el problema de la evasión. En ese sentido, estamos presentando un aditivo dirigido a combatir la evasión tributaria y a generar empleos de buena calidad. Lo hacemos a través de un mecanismo que duplica la indemnización por despido de los trabajadores en negro o mal registrados, situación que no sólo se da en el sector privado, sino que, lamentablemente, han habido muchos ejemplos en el sector público, lo que es muy grave. Si bien la legislación nacional prevé que el empleador que despide a un trabajador a causa de la denuncia que hizo sobre su declaración de sueldo para la historia laboral del Banco de Previsión Social debe abonar el triple de la indemnización, todos sabemos -lo decíamos en la sesión de ayer- que en épocas de crisis como ésta, en que miles y miles de personas están buscando trabajo en los pocos emprendimientos productivos que existen, es muy difícil enfrentar al patrón haciendo una denuncia que posiblemente -y sin posiblemente- termine en el despido liso y llano.

¿Qué tratamos de hacer con nuestra propuesta? Que la indemnización mayor por parte del empleador sea un inhibidor del trabajo en negro. El artículo aditivo que figura en la Hoja N° 6 dice: "En caso de despido de trabajadores cuyos servicios o montos impositivos no hayan sido total o parcialmente declarados al Banco de Previsión Social, el empleador deberá abonar el triple de la indemnización común que legalmente corresponda". Quiere decir que no debe hacerse necesariamente por vía de la denuncia del trabajador, a riesgo de su trabajo, sino simplemente cuando se produce su despido.

Más allá de que la mayoría de las exoneraciones impositivas no afectan sustancialmente los fondos del Banco de Previsión Social porque son cubiertos por Rentas Generales, nos parece que el problema de la evasión no puede estar exceptuado de la batería de mecanismos que debemos utilizar.

En segundo lugar, estamos promoviendo el tema del financiamiento del Fondo de Reconversión Laboral. La fundamentación es bastante obvia en tanto la formación profesional se ha convertido en un componente esencial de los nuevos sistemas de organización del trabajo y de la competitividad de las empresas, por un lado, y de la empleabilidad de las personas, por otro.

La Junta Nacional de Empleo, organismo que como todos sabemos es de integración tripartita, se ha puesto de acuerdo en apoyar la gravabilidad de los premios de los juegos de azar como forma de financiarse. Debemos recordar que la financiación de la Junta Nacional de Empleo en primera instancia se hizo únicamente con el aporte de los trabajadores, que fue del 0.25%. Desde hace alrededor de dos años también aportan los empresarios, pero el Estado prácticamente no aporta a este importante mecanismo de recalificación profesional; sólo ofrece la infraestructura para que puedan desarrollarse las gestiones en ese ámbito.

Estamos promoviendo -acompañados por la bancada del Nuevo Espacio, que apoya esta iniciativa- la creación de un gravamen adicional con destino al Fondo de Reconversión Laboral. Por lo tanto, no estamos creando un nuevo impuesto, sino proponiendo un gravamen adicional al previsto en el literal e) del artículo 3° de la Ley N° 16.343. Creemos que sería importante implementar este gravamen para los premios de un juego generalizado como es el "5 de Oro".

SEÑORA RONDAN.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BENTANCOR.— Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA RONDAN.— Señor Presidente: simplemente, quiero manifestar algo que se me ocurre en este momento.

Si nosotros gravamos el juego, ¿no se resentirán los fondos que son del juego y que se destinan a sostener otros organismos como, por ejemplo, el INAME? Esto no lo digo para poner un palo en la rueda, sino como una reflexión. Porque si se grava en cierta área, se va a complicar lo que está destinado a determinadas entidades.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Puede continuar el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.— Señor Presidente: este tema ha sido analizado por nosotros y por los compañeros integrantes de la Junta Nacional de Empleo.

Se trata de una propuesta en la que también participó el delegado gubernamental. Con ella no se grava el juego, sino los premios. Estamos seguros de que quienes apuestan al "5 de Oro" -si tienen la suerte de ganar, como los tres

últimos beneficiados, que se repartieron entre tres más de US\$ 2:000.000- no se sentirán molestos por el hecho de que se aplique una detracción en el premio que reciban para destinarla a una causa tan loable como es la recalificación profesional.

SEÑOR FALCO.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BENTANCOR.— Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.— Señor Presidente: simplemente quiero hacer una pregunta puntual.

Tengo una duda con respecto a un aditivo a esta sección. Si no entendí mal, las dos modificaciones que proponen tienen que ver con la normativa ya existente, o sea, con el artículo 453 de la Ley Nº 16.320, que refiere a la preceptividad en el caso de la denuncia de parte y al plazo de un año, que ya no se tendría en cuenta. ¿Esto es correcto?

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Puede continuar el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.— Exacto.

Entonces, queda claro cuál es nuestra propuesta con respecto a la necesaria capitalización del Fondo Nacional de Reconversión Laboral.

Por último, queríamos ahondar en dos temas importantes, pero nuestra exposición será complementada por la de otros compañeros, para no abusar del tiempo.

Hemos propuesto que se analice la reducción de la jornada laboral, que por cierto no es algo inventado por nosotros. Hacemos referencia a la Recomendación Nº 116 de la Organización Internacional del Trabajo. Creemos que se debe avanzar en el estudio del difícil tema de la reducción de la jornada laboral a través de una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores y de los empleadores. No estamos hablando de monto, sino de la posibilidad de estudiar esta propuesta. En este sentido, hay una experiencia internacional importante, ya que algunos países desarrollados la han llevado a la práctica con gran éxito.

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: particularmente, vamos a argumentar con relación a la Hoja Nº 5, relativa a la contracara del empleo: la situación de desempleo.

Aquí se ha votado una serie de medidas que esperamos, con mayor o menor convicción, que tengan un resultado sobre la generación de empleo. Ahora bien, este resultado no va a ser inmediato; por lo tanto, hay que contemplar la situación de lo que comúnmente se denomina "mientras tanto qué". Y, mientras tanto, el seguro de desempleo tiene que hacer números porque su capacidad no alcanza para atender a todas las personas que intentan acogerse a ese beneficio. Y, mientras tanto, se da la situación de que las personas viejas para trabajar y jóvenes para jubilarse son las que encuentran mayores obstáculos para conseguir un nuevo empleo cuando no lo tienen y son las que tienen más dificultades a la hora de recapacitarse en otras actividades. Esto se relaciona con la reconversión laboral de la que hablaba el señor Diputado Bentancor.

En ese sentido, planteamos la ampliación del tiempo de permanencia en el seguro de paro para aquellas personas que tengan más años de trabajo, y mayores estímulos para aquellos que tengan familia a cargo y para uno de los dos miembros de la pareja, si ambos tienen la desgracia de tener que utilizar el seguro de desempleo. Además, quisiéramos incorporar a sectores que hoy no están amparados por el seguro de paro, aunque aportan a la seguridad social.

El señor Diputado Barrios dijo que se aumentó la tributación del trabajador rural, pero aunque éste aporta a la seguridad social exactamente lo mismo que el urbano y el industrial, no tiene los mismos derechos, no puede acogerse al seguro de paro. Sucede lo mismo con aquellos que cortan uva o trabajan en las quintas, que nunca pueden llegar a estar ocupados seis meses en un año, así como con quienes desarrollan actividades en la temporada turística, que en el mejor de los casos trabajan tres meses en el año y tampoco tienen derecho al seguro de paro.

Por este motivo, planteamos que para los casos de trabajo zafra, el seguro de paro, en lugar de contemplar un período de seis meses en un año, lo haga en dos años. Se podrá decir que esto le costará al Estado; ¡claro que le costará! Estamos de acuerdo en que hay que financiarlo. En este sentido, establecimos como fuente de financiación -lo dijimos en el informe-

la utilización de un instrumento al que el Estado renunció cuando se aprobó la Ley Nº 16.713, que consistía en aplicar un impuesto a las comisiones de las AFAP.

Estas Administradoras actualmente están obteniendo un buen rendimiento. Por lo tanto, cobrar el impuesto a las comisiones -lo que el Estado hoy no hace- representaría un ingreso anual aproximado de US\$ 3:000.000, con lo que no sólo estaríamos financiando la incorporación de estos sectores, sino que sobraría algún dolarcito para cubrir seguros de paro que en la actualidad se financian exclusivamente con Rentas Generales. Ya se escucharán voces mañana, diciendo que es insostenible la situación del seguro de desempleo, que se está desfinanciando, que hay que buscar otros mecanismos, etcétera, porque eso es lo que hemos escuchado en anteriores oportunidades con relación a otras cuestiones. Entonces, de paso también hacemos una contribución en ese sentido.

Esta propuesta no es el resultado de un momento de pasión legislativa; es el producto de tres años de reflexión y de búsqueda de alternativas, sabiendo cuál era el objetivo que se perseguía y siendo conscientes de que no se podía colocar sobre el Estado una carga adicional, que no es capaz de solventar.

Hemos tratado de resolver dos injusticias; en primer lugar, la de los sectores que aportan y no están incluidos y, en segundo término, la diferencia en la posibilidad de llegar al empleo de quien ingresa por primera vez al mercado laboral, y de quien es joven para jubilarse y viejo para trabajar.

Coincido con el señor Presidente de la República en que se habla de infantilización de la pobreza, de los problemas de la ancianidad y de los jóvenes, cuando en realidad todo esto se reduce a un solo problema, que es el de la pobreza de la gente. Lo que pasa es que después los estudios sociológicos comienzan a establecer clasificaciones y categorías.

Por otra parte, hay un drama que esta sociedad no está percibiendo, que es el de los mayores de cuarenta y cinco años que pierden el trabajo y que, por lo general, tienen una familia a su cargo. Este tipo de situaciones conduce a niveles de desesperación que no han sido realmente calibrados. Se genera una situación de desánimo que es mucho peor que las circunstancias objetivas de crisis. Cuando una sociedad no cree en la posibilidad de salir adelante, hay mucho más para hacer que

cuando está pasando por dificultades económicas importantes, pero tiene la certeza de que algún día va a salir. Y hoy, la población del Uruguay está padeciendo un estado de desesperanza. Antes, al ciudadano común se le preguntaba "¿Cómo estás?" y respondía "Voy tirando". Y ahora he escuchado respuestas que no son "Voy tirando", sino "Me estoy arrastrando".

El 67% de los jóvenes se quiere ir del país. Esto es un problema para todos y debemos dar mensajes y hacer propuestas concretas, que aun en el marco de la crisis, vayan en el sentido de encontrar soluciones.

De ahí esta propuesta y también el planteo de que el Estado asuma un registro de desocupados, que clasifique las capacidades de quienes lo integren, para que los empresarios dispongan -no en forma obligatoria, obviamente- de un instrumento más para proveerse de recursos humanos. Inclusive, si hubiera acuerdo, trataríamos de perfeccionar esta propuesta a través de estímulos tributarios. Sería buena cosa que el Uruguay registrara qué tipos de desempleados tiene, y diera a empresarios y desocupados un instrumento mediante el cual puedan disponer de los recursos humanos, que a veces no se sabe dónde están. De esta forma se evitaría la penosa situación de esas largas colas por empleos de muy pocos pesos; a veces sólo se necesita cubrir una plaza y el empresario se ve en la dificultad de decir 699 veces "no" y una vez "sí".

Es por estas razones que hacemos estos planteos, que son el producto de la meditación, de la reflexión y de la responsabilidad con que deseamos abordar estos temas, porque estamos lejos de las propuestas demagógicas; se podrá o no compartirlas, pero nadie puede decir que no cuentan con la financiación respectiva.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Señor Presidente: es evidente que a través de estos aditivos se pueden introducir distintos temas a la consideración del Cuerpo. Por supuesto que estamos de acuerdo con algunas de las reformas planteadas al Decreto-Ley Nº 15.180, sobre seguro de desempleo. Estamos hablando del trabajo doméstico, del trabajador rural, del trabajo zafra, e inclusive de aquellas personas que -como bien decía el señor Diputado

Pintado- se encuentran en una situación intermedia entre dos horizontes: o son muy jóvenes para jubilarse o muy viejos para conseguir un segundo trabajo.

Quienes hemos estudiado el derecho laboral sabemos que la ley sobre seguro de desempleo, que ha sido muy importante para el país, representó un "aggiornamento" y que la propia cátedra la ha venido manejando durante muchísimos años.

Para el caso de estas propuestas se ha ofrecido un financiamiento; nos congratulamos al comprobar que después de un tiempo el Encuentro Progresista se esté dando cuenta de que las medidas hay que ofrecerlas con fórmulas de financiación. Como resulta evidente, toda fórmula de financiamiento supone sacar el dinero de algún lado, un encarecimiento a través de los impuestos, que en este caso puede recaer en el sector de los jubilados.

Más allá de esa circunstancia, quisiera que se realizara alguna precisión, porque en Comisión no se profundizó lo suficiente, y si incurrí en algún olvido desearía enmendarlo. Debemos contar con un cálculo real acerca de cuántos son estos trabajadores domésticos, cuántos serían los trabajadores rurales comprendidos en el seguro de desempleo, y lo mismo en el caso del trabajo zafra, que incluye actividades que fluctúan mucho de una temporada a otra. Sin contar con esos datos -que nosotros no poseemos- no podemos resolver estos temas planteados a nivel de la Comisión de Legislación del Trabajo y que se encuentran pendientes de resolución. Hoy, no podemos decidir que la modificación de la referida ley se realice de esta manera.

Sí quiero realizar una consideración más precisa en cuanto a la propuesta sobre la bolsa de trabajo, con la cual discrepo desde el punto de vista filosófico. Estimo que el mercado laboral se rige entre las partes, entre los privados. El Ministerio interviene en la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, pero no es un intermediario entre el empleador y los trabajadores, entre el ocupado y el desocupado. No podemos hacer que un Ministro de Trabajo y Seguridad Social se encargue de conseguir trabajo a los demás.

Por otra parte, en nuestro país existen antecedentes en cuanto a bolsas de trabajo, y no dieron los frutos esperados. Es una experiencia vieja que ha fracasado.

Puedo coincidir con algunas de las normativas de orientación hacia el sector privado y de

capacitación de los desocupados. Pero creo que el Ministerio no es el ámbito adecuado para practicar una intermediación directa, ni tiene las potestades apropiadas para cumplir ese fin. Además, estaríamos dando la señal de que la forma de conseguir un empleo es a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Hemos discutido estos temas laborales tanto en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo como en la Comisión Especial que se ocupó de analizar el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Creo que hay una cuestión filosófica respecto al lugar en que nos ubicamos. Todos queremos que los trabajadores consigan empleo, deseamos bajar los costos empresariales, que se fomente la inversión y sea menor el número de personas que utilicen el seguro de desempleo como paliativo. Este no hace que la desocupación disminuya; es un paliativo. Y esta Cámara ha sido testigo de que muchas veces, debido a las graves situaciones económicas que hemos vivido, nos vemos obligados a votar extensiones del seguro de desempleo, que sólo dan un poco de aire para que los trabajadores puedan subsistir.

Pero también sabemos que a veces es mal utilizado el seguro de desempleo; sabemos que a veces es el propio trabajador quien pide estar en negro para seguir cobrando el seguro de desempleo. Entonces, para analizar estos temas hay que tomar en cuenta el contexto. Hay que tener cuidado porque cuando el propio trabajador pide al empresario que no lo ponga en planilla y que viole la ley a fin de cobrar el seguro de desempleo o, en el caso de que no lo estuviese percibiendo, para que no se le baje el sueldo -porque los aportes hay que pagarlos y no lo va a hacer sólo una de partes de la relación laboral, sino que deben hacerlo las dos-, evidentemente, tenemos que darnos cuenta de que podemos generar orientaciones pero no dar soluciones mágicas a través de la ley para terminar con la evasión. Estamos a favor de terminar con la evasión, de legalizar las medidas. Es más: hemos manifestado al Encuentro Progresista y al señor Diputado Bentancor que un tema en el que vamos a trabajar es el del despido especial para el caso de los trabajadores que se estén desempeñando en negro o a quienes no se les declara la totalidad del jornal. Es más: hablamos también de un aspecto especialmente establecido en un capítulo de este proyecto de ley que tiene que ver con las licencias, con respecto a las cuales

el señor Diputado Bentancor ha establecido una similitud con la Ley N° 11.577, referente al despido de la trabajadora grávida. Entonces, tenemos algunas coincidencias en cuanto al despido especial.

Sin perjuicio de ello, quiero manifestar las grandes dudas que tengo en cuanto al alcance filosófico de la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a su respectivo financiamiento. Desde nuestro punto de vista, esta Cartera tiene que ser un facilitador y no un regulador en forma dogmática, como puede ser la visión del Encuentro Progresista o de su sector.

SEÑOR BENTANCOR.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.— Señor Presidente: el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, cuando estuvo en la Comisión Especial que estudió este proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, manifestó que el Ministerio venía dando su apoyo a través de una intermediación entre las empresas privadas y la mano de obra, a fin de colocarla. Creo que hasta este punto el señor Diputado Acosta y Lara daría su apoyo si tenemos en cuenta su ideología. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene competencia directa en el tema, a través de lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley N° 16.320, del 1° de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 419 de la Ley N° 16.736. O sea que aquí no estaríamos dando nuevas potestades ni modificando ninguna normativa, pues ya el Ministerio tiene competencia directa para trabajar en el tema. Obviamente, se podrá estar o no de acuerdo en que el Ministerio desempeñe este rol y creo que es ahí que está planteada nuestra discrepancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Puede continuar el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Para finalizar, quisiera decir que nuestra diferencia está, no sólo en la competencia del Ministerio, sino también en si éste debe cumplir o no con ese papel. Considero en primer lugar, que el Ministerio no puede generar, entre la gente que busca trabajo, expectativas que van a ser

difíciles de colmar. En segundo término, considero que es el mercado el que tiene que regular estas cosas y no el Ministerio interviniendo en forma directa.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: en primer lugar, me gustaría hacer una declaración de autoimposición de disciplina legislativa. Hemos escuchado referencias a temas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando; se ha mencionado el tema de la vivienda; y ¡si tendremos cosas para decir a este respecto!; se ha comparado también el déficit nacional con el municipal que, para mí, humildemente -esto lo digo sin ánimo de ser ofensivo-, es como comparar velocidad con tocino. No voy a entrar en esos temas y voy a tratar de centrarme exclusivamente en lo que tenemos a consideración. Ya llegará la oportunidad de discutirlos, pero no quiero guardar absoluto silencio como si admitiera determinadas expresiones vertidas en Sala.

En primer lugar, me gustaría referirme a lo que es la creación del adicional sobre el 5%. Más allá de algunos errores que figuran en la redacción -se hace referencia al artículo 325 de la Ley N° 16.320, cuando en realidad debió figurar el artículo 327, porque se habla de los cometidos asignados y el artículo 325 no los asigna, sino que refiere a cómo se integra el fondo; la disposición que los asigna y dice cómo se atenderán las prestaciones es el artículo 327-, la cuestión es que me parece que a veces existe la tendencia a pensar que vamos a solucionar todos nuestros problemas creando nuevos impuestos al tabaco, a los alcoholes y al juego. Creo que esta materia exige un estudio más profundo, porque todas estas actividades tienen hoy una fuerte presión tributaria que, como señalaba la señora Diputada Rondán, tiene objetivos que son todos muy loables e importantes. Digo esto porque no sea cosa que queriendo aumentar los impuestos sin hacer un estudio de sensibilidad de lo que ya soportan esas actividades en materia tributaria, lo que logremos sea, en definitiva, empobrecer y disminuir una cantidad de aportaciones a finalidades y a instituciones que persiguen objetivos que tienen las características mencionadas.

Por lo dicho, creo que esto debe ser mirado con mucho detenimiento y que es un tema a estudio. Reconozco que estos aditivos colocan temas interesantes en la discusión, pero considero que éste no es el momento para pronunciarse favorablemente con respecto a ellos. En este sentido, adelantamos que nosotros vamos a votarlos negativamente, no obstante lo cual, reitero, reconocemos el mérito que tienen estos aditivos al traer algunos temas importantes a la discusión de esta Cámara, sobre los que seguramente tendremos oportunidad de volver.

En lo que refiere al seguro de paro y a las distintas modificaciones que se hacen, tenemos una primera duda que es de corte constitucional y es si esto no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, ya que se trata de un subsidio, de una prestación, de una dotación, o como se quiera interpretar; puede haber dos bibliotecas. Pero aun considerando que no requiriera iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo que el artículo 86 establece, sí requiere una financiación y ésta se establece, precisamente, en base a una modificación del régimen tributario de las AFAP. Esto sí representa la derogación de una exoneración impositiva, lo cual también hay que analizar con mucho cuidado. Aunque no conozco la cantidad de afiliados con exactitud, puedo decir que está en el orden de las seiscientas mil personas. Yo pregunto: ¿no estamos perjudicando con esta medida a esos seiscientos mil afiliados a las AFAP? ¿Cómo está repercutiendo esta medida en el sistema general y en las finanzas de las AFAP? Este es un tema muy importante, que requeriría un estudio pormenorizado en cuanto a sus consecuencias.

En lo que tiene que ver con otras modificaciones, como por ejemplo la sustitución del artículo 7º de la Ley Nº 15.180, se posibilita, según nosotros entendemos, la fijación de períodos de prestación superiores a seis meses y no se establece un lapso máximo. ¿Quién lo determina?

En lo que hace al tema de los trabajadores zafrales, ¿por qué sólo ellos? ¿Por qué no considerar en este régimen situaciones laborales similares, como los contratos por temporada, los contratos a prueba, los de aprendizaje? ¿Se entienden comprendidos? Tampoco se determina.

Creo que todas estas disposiciones -que en definitiva, como dije, están poniendo sobre la mesa temas importantes-, requerirían una

profundización mucho mayor que la que estaremos en condiciones de realizar en el día de hoy.

Nosotros decimos que sí hay temas interesantes, algunos de los cuales están a estudio del Poder Ejecutivo y otros deben tratarse desde el punto de vista de la concepción que nosotros tenemos de las cosas; no creemos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -como decía el señor Diputado Acosta y Lara- deba hacerse cargo de un registro para lo concerniente al empleo; eso se cumple en la actividad privada. El Estado deberá fomentar y facilitar esta actuación en la actividad privada porque, de hacerse cargo él, lo hará mal; ya lo ha probado, le ha salido mal y en definitiva no estaremos agregando nada nuevo. Además, tampoco se está estableciendo su financiación.

Es cierto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene competencia, pero en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, hemos escuchado a sus autoridades decir que tiene dificultades para cumplir muchos de sus cometidos debido a las asignaciones presupuestales. En este caso se le estaría agregando una tarea que según nuestro concepto no correspondería, aunque admitimos que puede estar dentro de las competencias que establece el artículo 327, lo cual no discutiremos al señor Diputado Bentancor.

Por todas estas razones y por las que expresaron nuestros compañeros de bancada y de Partido, no acompañaremos estos aditivos.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja Nº 3.

(Se vota)

— Treinta y ocho en setenta: **Afirmativa.**

SEÑOR AMORIN BATLLE.— ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

— Treinta y nueve en noventa y dos: **Negativa.**

Léanse los aditivos que figuran en la Hoja Nº 4, presentados por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella y Pintado.

(Se lee:)

"Artículo .— Sustitúyese el literal C) del

artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el siguiente:

'C) Si el empleado fuere casado, percibirá un suplemento del 20% (veinte por ciento) del subsidio que correspondiera conforme a lo establecido en los literales anteriores'.

Artículo .— Agrégase al artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, los siguientes literales:

'D) Si el solicitante casado o no, tuviere a su cargo al menos un familiar incapaz hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de veintiún años de edad, percibirá un suplemento del 30% (treinta por ciento) del subsidio conforme a lo establecido en los literales anteriores.

E) En los casos en que ambos cónyuges o concubinos que hubieren configurado las causales previstas en los literales A) y B) del artículo 5º y que tuvieran a su cargo dos o más familiares en los términos del literal anterior, tendrán derecho a percibir el 100% (cien por ciento) del promedio emergente según lo establecido en los numerales 1) y 2) del literal A) del presente artículo, aquel que resulte inferior de ambos promedios. Sin perjuicio que el otro cónyuge o concubino acceda al 20% (veinte por ciento) establecido en el literal C) del presente artículo'.

Artículo .— Sustitúyese el inciso final del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el siguiente:

'Facúltase al Poder Ejecutivo para incrementar los porcentajes establecidos en los literales anteriores en función de las posibilidades financieras del sistema y la situación del mercado de trabajo.

En ningún caso las prestaciones a servir podrán superar el equivalente a diez salarios mínimos nacionales'.

Artículo .— Sustitúyese el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el siguiente:

'ARTICULO 7º. (Término de la presta-

ción).— El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término mínimo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º y en el régimen especial.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un mínimo de setenta y dos jornales, ajustándose a lo establecido en el artículo 6º y el régimen especial.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización. Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho'.

Artículo .— Incorpórase al Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, el siguiente artículo:

'ARTICULO 18. (Régimen especial).— Las personas que al tiempo de configurarse la causal establecida en el artículo 3º del presente decreto-ley tuvieran cuarenta y cinco años de edad, tendrán derecho a percibir el 100% (cien por ciento) del promedio emergente, según lo establecido en el artículo 6º. Las personas comprendidas en el artículo 2º del presente decreto-ley, que al tiempo de solicitar el subsidio por desempleo, tuvieran más de cuarenta y cinco años de edad, percibirán el 100% (cien por ciento) del promedio establecido en el artículo 6º del presente decreto-ley, según corresponda, únicamente por el término de seis meses, a cuyo vencimiento continuarán percibiendo lo que les correspondiere según el régimen común, accediendo al quinto año de trabajo, a un mes más de subsidio por cada cuatro años de trabajo'.

Artículo . (Trabajo doméstico).— A los

trabajadores corresponderá el régimen establecido por el presente decreto-ley, realizándose la determinación de los cálculos correspondientes a todos los efectos en función de la forma establecida por las partes para la prestación del trabajo, aplicándose lo establecido en los artículos 6º y 7º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, y las modificaciones establecidas por la presente ley, según el caso.

Artículo . (Trabajo rural).— A los trabajadores rurales corresponderá el régimen establecido por la presente ley, realizándose la determinación de los cálculos correspondientes en forma análoga a lo preceptuado en el artículo anterior, en lo pertinente.

Las prestaciones en especie se integrarán en el cálculo del promedio base para la percepción del subsidio, de acuerdo con el ficto legal correspondiente.

Artículo . (Trabajo zafra).— Para tener derecho al subsidio del seguro de desempleo, se estará a lo dispuesto por los incisos primero y segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981.

Para estos trabajadores el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los veinticuatro meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal, facultándose al Poder Ejecutivo para extender este plazo hasta treinta meses, para el caso de ocupados en actividades que así lo justifiquen.

Artículo .— Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el siguiente:

'ARTICULO 9º. (Despido ficto).— Se considerará que se ha producido el despido del empleado suspendido en forma total de su empleo, si al término del período mínimo de la prestación, no es reintegrado al trabajo, pudiendo reclamar la indemnización que le correspondiere. El empleado que se encontrare percibiendo el subsidio por más de tres meses en situación de trabajo reducido podrá optar por considerarse despedido y reclamar la indemnización a que tuviere derecho'.

Artículo .— Incorpórase al Decreto-Ley

Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, el siguiente artículo:

'ARTICULO 19.— Las personas que al tiempo de acceder al subsidio por desempleo hayan configurado causal jubilatoria o la configuren durante el período de percepción del mismo, no estarán amparadas por el régimen especial establecido en el artículo 18'.

Artículo . (Financiación).— Sustitúyese el inciso segundo del artículo 132 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

'Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) quedarán incluidas en los regímenes establecidos para los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y a las Comisiones (COM). La recaudación proveniente del Impuesto a las Comisiones se destinará en su totalidad a cubrir los subsidios de desempleo forzoso de la actividad privada'.

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los aditivos que figuran en la Hoja Nº 4.

(Se vota)

— Treinta y siete en noventa y dos: **Negativa.**

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Señor Presidente: he votado estos aditivos que figuran en la Hoja Nº 4 y adelante que acompañaré las Hojas Nos. 5 y 6.

Si bien tengo dudas con respecto a si el Poder Legislativo tiene o no iniciativa en esta materia, fundamentalmente en lo relativo al seguro de paro para los trabajadores domésticos, rurales y zafrales, quiero dejar sentado que voté este aditivo para que el Poder Ejecutivo -que no tengo dudas si la tiene- sepa que en el Parlamento tenemos interés de que este tema se analice, se discuta y se apruebe. Entonces, dejo en suspenso lo que tiene que ver con la iniciativa, porque no estoy totalmente seguro de si la tenemos o no, pero me incliné por votar

el aditivo para que el debate después se diera a otro nivel.

Considero que tiene cierta razón el señor Diputado Ronald Pais en algunas de sus manifestaciones, particularmente en el sentido de que estos temas justifican un análisis profundo; en eso la mayoría de nosotros está de acuerdo. El señala que esto debió haberse analizado más profundamente; no tengo dudas de que debería haber sido así, pero algún día tendremos que poner el tema arriba de la mesa.

Estamos votando en la Cámara de Diputados y todavía queda la instancia del Senado para continuar analizando estos temas. A su vez, el Poder Ejecutivo puede vetar lo que quiera si es que lo entiende conveniente, pero creo que de todas maneras es positivo que la Cámara de Diputados diga al gobierno que estos temas deben ser puestos encima de la mesa en forma inmediata, fundamentalmente el que refiere al seguro de paro, ya que los otros aspectos son aleatorios y pueden ser motivo de algún ajuste.

Quiero dejar sentado que estoy totalmente a favor de que el seguro de desempleo se extienda a los trabajadores rurales, domésticos y zafrales; eso fue lo que me llevó a votar la Hoja N° 4. Hemos perdido la votación, pero en otra oportunidad conseguiremos algunos votos más y tal vez hagamos realidad estos proyectos.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Léanse los aditivos que figuran en la Hoja N° 5, presentados por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella y Pintado.

(Se lee:)

"Artículo .— El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, deberá operar en la intermediación y colocación laboral mediante oficinas departamentales que llevarán un registro de personas desocupadas y de empresas que demanden personal para la cobertura de sus vacantes.

Artículo .— La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo tendrá como cometidos:

- a) Proporcionar a las oficinas departamentales de colocación información actualizada del mercado de trabajo nacional y regional en lo referente a las clasificaciones profesionales que se demanden por parte del sector privado,

a efectos que cooperen activamente mediante un servicio de intermediación en el empleo;

- b) llevar un registro nacional de trabajadores desocupados;
- c) coordinar los programas de colocación que realicen las oficinas regionales;
- d) otorgar la habilitación y llevar un registro de las agencias privadas de colocación".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los aditivos que figuran en la Hoja N° 5.

(Se vota)

— Treinta y ocho en noventa y tres: **Negativa.**

SEÑOR BAYARDI.— ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

— Cuarenta y uno en noventa y dos: **Negativa.**

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Señor Presidente: también hemos votado estos aditivos porque van en el mismo sentido de una iniciativa que elaboramos en la campaña electoral y que en parte queremos proponer en el Parlamento. Esta tiene que ver con la creación de una Oficina Nacional del Empleo donde se coordinen todas las ofertas y demandas de empleo y donde un trabajador, por ejemplo de Artigas o de Rivera, pueda obtener información y tomar conocimiento de que lo que él sabe hacer es útil en Rocha o en Maldonado.

En este momento, el trabajador no está debidamente asesorado. Sabemos que hay gente preparada que vive en una punta del país y que lo que ella sabe hacer se reclama en la otra. Por esta razón creemos que es muy positivo que existan oficinas que asesoren, aconsejen y digan a los desocupados dónde puede haber necesidad de su especialización y de su fuerza de trabajo, si es que la hay.

Este aditivo va en la misma orientación de una idea que desarrollamos en la campaña electoral y por eso creemos que es una buena medida. Tal vez en su momento se logren algunos votos más y podamos hacer realidad esta iniciativa en el Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Léase el aditivo que figura en la Hoja N° 6, presentado por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella y Pintado.

(Se lee:)

"Artículo .— En caso de despido de trabajadores cuyos servicios o montos imposables no hayan sido total o parcialmente declarados al Banco de Previsión Social, el empleador deberá abonar el triple de la indemnización común que legalmente corresponda".

— En discusión

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja N° 6.

(Se vota)

— Cuarenta y uno en noventa y dos: **Negativa.**

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.— Señor Presidente: quiero dejar constancia de que también he acompañado esta propuesta y de que no puedo entender por qué no la han votado los demás; no entiendo por qué el partido de gobierno no apoya esta medida, que lo único que hace es dar claridad a las propias finanzas del Banco de Previsión Social, en el sentido de salvaguardar que esté declarado lo que efectivamente ganan todos los trabajadores y el período en que trabajan. No tiene costo, no molesta a nadie que cumpla; esta medida no roza a los empresarios que cumplan.

Realmente, no comprendo por qué cuando fue presentada en la Comisión respectiva no fue recogida. Habrá motivos para ello, pero quiero dejar sentado que estoy de acuerdo con esta medida, que simplemente ordena las cosas, y por eso la he votado.

SEÑOR FALERO.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.— Señor Presidente: estamos absolutamente en contra de que haya trabajadores por los que no se declara los montos que perciben, y de que haya empleadores que oculten -por sí o por acuerdo con los trabajadores- los montos totales que sus trabajadores reciben. Sin embargo, este artículo ingresa en la materia laboral, que es muy compleja; tiene que ver con las reclamaciones laborales. De aprobarse, generaría una serie de conflictos que no fueron correctamente analizados en el ámbito de la Comisión.

Según esta propuesta, inclusive los trabajadores que en principio estarían de acuerdo en que sus salarios tuvieran los descuentos que corresponden, podrían luego argüir, en el caso de demandas por despidos, que parte de sus remuneraciones estaban en negro. Además, en cada uno de los juicios laborales podrían generarse conflictos por este motivo, porque se triplicaría la indemnización que corresponde legalmente y en definitiva nunca estaríamos dando seguridad jurídica a la situación.

Por lo tanto, si bien estamos de acuerdo en que se debe analizar el tema y en que debe tomarse en consideración lo que el trabajador realmente percibe y no lo que está declarado, porque no siempre lo declarado se corresponde con la realidad, creemos que este artículo no resuelve satisfactoriamente el problema, sino que, por el contrario, puede agravar los conflictos que ya son graves de por sí, en cada uno de los juicios laborales que se tramitan en el país.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— Señor Presidente: ratifico lo expresado por el señor Diputado Falero, porque considero que esta propuesta en lugar de solucionar puede agravar las relaciones laborales entre las partes. ¿En base a qué hago esta afirmación? En base al hecho de que muchos trabajadores que están en el seguro de desempleo consiguen una segunda fuente laboral y piden expresamente que los pongan en negro porque de lo contrario pierden el beneficio.

De ninguna manera estamos fomentando con

esto que persista esta situación, ni que declaren menos de lo que perciben, pero tenemos que darnos cuenta de que con esta medida estamos agravando las relaciones entre las partes.

¿Cuál es la forma de ir contra la evasión? Fiscalizando mejor, hay que disponer de mayores medidas inspectivas y procurar que los órganos que tienen la potestad de hacerlo se pongan a trabajar debidamente.

SEÑOR BERGSTEIN.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.— Señor Presidente: esta disposición establece un régimen privilegiado para aquellos trabajadores que están en negro en relación -valga la expresión- con los que están en blanco, sin discriminar cómo se llegó a esa situación. Hasta podría ser, en la práctica, un factor de estímulo a que los trabajadores pidan a sus empleadores estar total o parcialmente en negro -siguiendo con esa terminología- para que, en caso de un eventual cese de la relación laboral, puedan reclamar el triple de la indemnización común.

Tal como está redactada, esta disposición nos parece sumamente peligrosa, porque -insisto- beneficia al trabajador en negro en relación con el resto de los trabajadores.

SEÑOR PINTADO.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.— Señor Presidente: sólo quiero dejar una constancia. La relación entre empleador y trabajador no es entre iguales; el que tiene la potestad de inscribir o no a un empleado siempre es el empresario. Si éste no quiere tenerlos en negro, aunque todos los trabajadores de la empresa se lo pidan, no lo hace, porque es el dueño de la fuente de trabajo.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Señor Presidente: voy a fundar mi voto negativo a este aditivo y a los anteriormente considerados. Lo

hice en el entendido de que con respecto a algunos ya existe una moción en la Mesa, firmada por representantes de los cuatro Partidos, solicitando que pasen a estudio de la Comisión especializada. Nosotros no hemos negado su importancia, sino que pretendemos darnos el tiempo necesario para analizarlos, puesto que estos aditivos han sido presentados en las postrimerías del trabajo de la Comisión.

Se trata de temas que queremos abordar y estamos comprometidos a hacerlo; y no me refiero solamente a la bancada de gobierno, sino también al Partido Nacional, que ¡vaya si le corresponde responsabilidad en esto!; responsabilidad que ha mantenido firmemente y con claridad no sólo a través de sus legisladores, sino del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que representa a ese Partido en el gobierno.

Entendemos que ciertos aspectos son positivos; algunos de ellos son compartibles en algún grado, pero decimos directa y frontalmente que no compartimos que generen un aumento del empleo. Por lo tanto, no los vemos enmarcados en el ámbito de esta sección del proyecto. Sí creemos que los debemos abordar, por lo que estamos proponiendo a la Cámara que vuelvan a la Comisión respectiva para ser analizados.

Me quiero referir en forma particular al registro de trabajadores desempleados. No acompañamos el artículo que lo propone porque entendemos que no es una función propia del gobierno, o que deba desarrollar el Estado. Su función es respaldar, incentivar y ayudar para que la sociedad se desarrolle. Pero no debemos comenzar a agrandar el espectro de actividades que se llevan adelante desde el Estado, porque de esa forma los únicos que terminarán consiguiendo trabajo serán los propios funcionarios públicos que se ocuparán de ese registro.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Léase el aditivo que figura en la Hoja N° 7, presentado por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella y Pintado.

(Se lee:)

"Artículo .— Créase en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una Comisión Tripartita integrada por las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores tendiente a orientar e incentivar los procesos de reducción progresiva de la

jornada laboral, los cuales implementarán mediante convenios colectivos.

El principio de progresividad en la disminución de la duración del tiempo de trabajo podrá adoptar alguna de las formas siguientes:

- a) reducción de la jornada en etapas espaciadas en el tiempo;
- b) en etapas que comprendan ramas o sectores de la economía nacional;
- c) una combinación de las dos fórmulas precedentes".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja N° 7.

(Se vota)

— Treinta y nueve en ochenta y tres: **Negativa.**

SEÑOR FALERO.— Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.— Señor Presidente: voy a solicitar que los aditivos que figuran en la Hoja N° 4 se pasen a la Comisión de Legislación del Trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Debemos proceder a la votación de cuatro mociones.

En primer lugar, vamos a dar trámite a la moción presentada en el día de ayer relativa al levantamiento de la declaratoria de urgente consideración, ya que en Sala existe el quórum que la Constitución requiere.

En segundo término, procederemos a votar la moción por la que se autoriza a la Comisión de Legislación del Trabajo a reunirse durante el receso parlamentario.

Posteriormente consideraremos dos mociones. Una de ellas propone que el aditivo contenido en la Hoja N° 3 pase a la Comisión de Legislación del Trabajo, y la otra que el aditivo que figura en la Hoja N° 6 pase a la misma Comisión.

SEÑOR CHIFFLET.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.— Señor Presidente: simplemente, quiero recordar que a primera hora de la sesión de hoy hemos presentado a la Mesa una moción para que se autorice a la Comisión de Derechos Humanos a sesionar durante el receso.

SEÑOR PRESIDENTE (Michelini).— Si bien hay varias mociones para autorizar a las Comisiones a sesionar durante el receso -la Cámara ha acordado autorizarlas una por una-, entendimos que la relativa a la Comisión de Legislación del Trabajo debía votarse ahora porque está relacionada con dos de las mociones.

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Barandiaran, Falero, Pablo Mieres, Pintado y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara de Representantes deje sin efecto la declaratoria de urgente consideración, de acuerdo con el literal c) del numeral 7º) del artículo 168 de la Constitución de la República".

— En discusión.

La Mesa aclara que para aprobar esta moción se necesita una mayoría especial de sesenta votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Cuarenta y tres en ochenta y ocho: **Negativa.**

4.— Comisión de Legislación del Trabajo. (Autorización para reunirse durante el receso)

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Acosta y Lara, Falco, Bentancor y Bonomi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Legislación del Trabajo a reunirse durante el receso parlamentario (artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Representantes)".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Ochenta y cuatro en ochenta y ocho: **Afirmativa.**

5.— Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)

Continúa la consideración del asunto en debate.

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Bayardi, Falco, Leglise y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el aditivo a la Sección I, contenido en la Hoja N° 3 del repartido de aditivos y sustitutivos al proyecto de ley sobre fomento del empleo y mejoras de la Administración, pase a consideración de la Comisión de Legislación del Trabajo".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Ochenta y cinco en ochenta y siete: **Afirmativa.**

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Falco y Bayardi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se envíe a la Comisión de Legislación del Trabajo el aditivo incluido en la Hoja N° 6 del repartido de aditivos y sustitutivos al proyecto de ley sobre fomento del empleo y mejoras de la Administración".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Ochenta y dos en ochenta y cuatro: **Afirmativa.**

Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Falero.

(Se lee:)

"Mociono para que el aditivo contenido en la Hoja N° 4 pase a la Comisión de Legislación del Trabajo".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Setenta y dos en ochenta y cuatro: **Afirmativa.**

Se pasa a considerar la Sección II, "Fiscalización de sociedades comerciales en las que participen los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados", que comprende los artículos 7° y 8°.

Léanse los artículos 7° y 8°.

(Se lee:)

"Artículo 7°.— Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado autorizados legalmente al efecto, sólo podrán participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando el consorcio o sociedad a constituir admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno, integrado por sus representantes y en forma proporcional a su participación.

Los mencionados organismos deberán informar al Poder Ejecutivo sobre la configuración de tales extremos, con una antelación no menor a treinta días de la proyectada formalización del emprendimiento o asociación.

Asimismo, deberán informar anualmente al Poder Ejecutivo sobre la gestión de la sociedad o emprendimiento respectivo y remitirle toda otra documentación de carácter contable, jurídico o empresarial que sea sometida a su consideración, en un plazo no mayor a los treinta días de recibida la misma.

Lo establecido en el presente artículo es sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 17.040, de 20 de noviembre de 1998.

Artículo 8°.— En caso de que los

emprendimientos o asociaciones a que se alude en el artículo 7º, se hubieren acordado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, los organismos involucrados deberán informar al Poder Ejecutivo sobre el grado de participación en el control interno y sobre los estados contables correspondientes, dentro del plazo de treinta días corridos a partir de su promulgación.

En todos los casos, la información será suministrada a través del Ministerio por el que se vincula el organismo con el Poder Ejecutivo".

— En discusión.

SEÑOR FONTICIELLA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Michellini).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.— Señor Presidente: nuestra fuerza política va a acompañar, como lo hizo en segunda instancia en la Comisión, el texto de los artículos 7º y 8º, pero brevemente queremos dejar una constancia equivalente a la que hicimos en aquel momento y que figura en la versión taquigráfica correspondiente.

Consideramos que el tipo de fiscalización propuesto es insuficiente y que no es lo que el Estado uruguayo necesita para ejercer el contralor en profundidad de los bienes de sus ciudadanos. No queremos negarnos a ningún tipo de fiscalización, pero sí deseamos precisar con absoluta claridad que esto resulta insuficiente. Como entendemos que existe muy buena disposición por parte de quienes lo han propuesto, hemos agregado dos aditivos al texto que tienen que ver con la profundización de la fiscalización, que no involucran para nada a las empresas privadas que se puedan asociar con los organismos del Estado; no implican ningún riesgo en cuanto a que se pueda correr a algún inversor por suponer que en sus cosas se va a mezclar el Tribunal de Cuentas.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amaro Cedrés)

— Cuando llegue el momento de la consideración de los aditivos, los vamos a fundamentar, pero desde ya dejamos la constancia del Encuentro Progresista-Frente Amplio en el sentido de que va a acompañar los artículos 7º y 8º, aunque los considera insuficientes.

SEÑOR ROSSI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.— Señor Presidente: como bien lo anunciaba el señor Diputado Fonticiella, la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio va a acompañar estos dos artículos. Lo hacemos porque consideramos que está bien que el órgano de contralor interno designado por la propia institución que se forme con participación de privados y del propio Estado deba elevar información al Poder Ejecutivo para su conocimiento; es un procedimiento que no está de más. Sin embargo, es absolutamente insuficiente, porque de lo que se trata es de establecer mecanismos que, junto con las debidas garantías en cuanto al funcionamiento de las empresas que manejan bienes y fondos del Estado, permitan ejercer el contralor, no por parte del que tiene a su cargo la gestión, sino de quienes están fuera de ella; se trata del contralor con la independencia debida, tal como está establecido en la propia Constitución de la República y en el TOCAF.

A nuestro entender, el contenido de los artículos 7º y 8º está por debajo de lo que el TOCAF establece en sus artículos 94 y 160 con respecto a organismos privados que manejan fondos del Estado. Estos artículos fueron aprobados cuando todavía no tenían forma estos nuevos modos de promover la participación de capitales privados junto con el Estado.

Sin embargo, si analizamos el contenido y las obligaciones que de ahí se deducen, comprobaremos que las empresas que se conformen en esta dirección no estarían exoneradas de brindar la información debida a los organismos de contralor dispuestos por el Estado. Por el contrario, cuando estamos en la víspera de tomar resoluciones importantes referidas al futuro de empresas como ANTEL, y cuando ya se han anunciado las bases a que se recurriría para llamar a subasta un 80% de la actual playa de contenedores que administra hasta hoy la Administración Nacional de Puertos, nos parece más importante que nunca establecer este tipo de mecanismos con el mayor rigor posible. Es una tarea que corresponde al Parlamento, máxime porque no estamos partiendo de cero, sino de algunas experiencias lamentablemente negativas en este sentido.

El proceso que ha vivido la empresa PLUNA -va a llegar el momento en que el Parlamento deba examinarlo en profundidad- es una prueba de los controles que se practicaron con

insuficiencia y que derivaron en la necesidad de tener que comprometer el paquete accionario de la parte que quedó en propiedad del Estado.

Hace pocos días también fue noticia la suerte del Instituto Nacional de Alimentación. Aun con mecanismos de control -por lo menos establecidos en el papel-, nos enteramos de su suerte cuando ya no había ninguna posibilidad de rescate.

Estamos hablando de que vamos a entrar en una etapa donde ni más ni menos que ANTEL, ni más ni menos que la playa de contenedores, ni más ni menos que otros proyectos de este tipo, están involucrados en este proceso que el país se apresta a poner en marcha.

En ese sentido, constituye una experiencia negativa la Corporación Nacional para el Desarrollo y lo que ha sido su conducta en esta materia.

El artículo 29 de la Ley N° 15.785, que es la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, no deja ningún lugar a dudas respecto a las obligaciones que el organismo tiene que cumplir en esta materia. La historia de desencuentros de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Tribunal de Cuentas no es nueva.

Quiero referirme a lo que sucedió con el balance de 1999, que fue remitido al Tribunal de Cuentas el 19 de abril por parte del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, acompañado de la auditoría particular y externa contratada por ésta. El día 5 de mayo, el Tribunal de Cuentas comunicó a la Corporación Nacional para el Desarrollo que había decidido designar a un contador del Tribunal de Cuentas para que pudiera hacer los trabajos de visación, es decir, para que comprobara que los balances y los informes de auditoría coincidieran con los papeles de respaldo en poder de aquella. Frente a esto, el 8 de mayo de 2000, la Corporación Nacional para el Desarrollo envía una nota -tengo en mi poder una copia- en la que reitera su oposición a que esta tarea de visado, de comprobación -expresamente establecida en el artículo 29 de la ley de creación de Corporación Nacional para el Desarrollo-, sea cumplida por parte del Tribunal de Cuentas. Dice que son suficientes la auditoría interna ejercida por la propia Corporación Nacional para el Desarrollo y la auditoría externa que ha sido contratada. Reitero que tengo en mi poder una copia de la carta; puedo leerla y compartir con los señores legisladores la documentación. Hago esta refe-

rencia porque creo que resume el problema que tenemos que enfrentar.

Frente a esto, los equipos del departamento técnico del Tribunal de Cuentas procedieron a examinar el balance y los comentarios que la auditoría externa hacía sobre el particular. Nos encontramos con que la opinión que remiten los técnicos -que después es confirmada por los Directores correspondientes del departamento técnico del Tribunal de Cuentas- es la siguiente: "Con relación a la auditoría a realizar a los Estados Contables remitidos por la Corporación Nacional para el Desarrollo correspondientes al ejercicio 1999, cúpleme informar que el día 5 de mayo próximo pasado concurrimos al Organismo a efectos de iniciar los trámites de estilo para comenzar el trabajo. Al igual que en oportunidades anteriores, nos dirigimos a la Cra. Cristina Montes". A continuación describen cómo no se les permitió desarrollar el trabajo.

Más adelante agregan: "En esta carpeta" -es la N° 187.941 del Tribunal de Cuentas- "constan los estados financieros de la CND por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 1999. Al igual que en el ejercicio anterior vienen acompañados del dictamen de auditoría externa de la firma", y sigue el nombre de la firma auditora que realiza la comprobación. Y continúa: "Con relación a este dictamen corresponde expresar los mismos comentarios efectuados para el ejercicio anterior". Finalmente, la firma auditora "emite una opinión limpia con salvedades".

A continuación, pasan a examinar las salvedades. Se refieren a los numerales 4 y 5 del dictamen, cuyos resultados totalizan un monto del patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de US\$ 43.474.495,88. El total del patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, al cierre, era de US\$ 53.101.589.

Por lo tanto, la conclusión del equipo auditor -no de este Diputado- es que las salvedades a que se refiere el dictamen de auditoría externa representan más del 80% del patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta observación -que se remite posteriormente al Tribunal de Cuentas y que lleva a que éste no acepte, observe el balance presentado y no pueda intervenir por falta de elementos para la comprobación; inclusive, tenemos aquí el informe del dictamen de los auditores con más detalles sobre estos aspectos- pone de manifiesto que aun en las empresas que tienen estas particularidades que los nuevos tiempos imponen, como la Corporación Nacional para el

Desarrollo, hay dificultades para el control, que los Diputados y el Poder Legislativo tenemos la oportunidad y la obligación de salvar.

Cuando estamos en la víspera de la instalación de nuevas formas y de nuevas empresas, donde el patrimonio del Estado, el ahorro acumulado de los uruguayos, va a ser administrado con nuevas formas jurídicas por parte de gestores privados, es imprescindible incorporar normas; pero para nosotros no son suficientes los artículos 7º y 8º. En caso de que se aprobaran los aditivos propuestos por la banca del Encuentro Progresista-Frente Amplio, esos artículos mejorarían, pero no resolverían totalmente el problema, que merece ser considerado especialmente. En ese sentido, se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que nos parece imprescindible abordar a la brevedad posible.

6.— Licencias Integración de la Cámara

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Dese cuenta de un asunto relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencias siguientes:

Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 13 de diciembre de 2000, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Odel Abisab.

Del señor Representante Raúl Argenzio, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 15 y 19 de diciembre de 2000, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Olegario Machado.

Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2000, convocándose al suplente siguiente, señor Alvaro Pérez".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Cuarenta y siete en cincuenta y uno:
Afirmativa.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(Antecedentes:)

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por razones de índole personal solicito se me conceda licencia en el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a Ud. cordialmente.

Gustavo Borsari Brenna
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por razones de índole personal me será imposible asumir por esta única vez como suplente del Diputado Gustavo Borsari.

Sin otro particular, saluda a Ud. cordialmente.

Raúl Gluria Barbot".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de diciembre de 2000.

II) Que, por esta vez, no acepta la convoca-

toria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Raúl Giuria Barbot.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes

RESUELVE

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 13 de diciembre de 2000, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Raúl Giuria Barbot.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 13 de diciembre de 2000, al suplente correspondiente siguiente de la hoja de votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Odel Abisab.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2000.

**Oscar Magurno, Guillermo
Alvarez, José María
Mieres".**

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. licencia por motivos personales, desde el 15 de diciembre al 19 de diciembre inclusive, en virtud de lo cual pido sea convocado mi suplente respectivo.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.

Raúl Argenzio Santos
Representante por Lavalleja".

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
S/D.

De mi mayor consideración:

La que suscribe, por la presente comunico a Ud. que por esta vez, no acepto la convocatoria de la que fui objeto.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Laura Rodríguez Alzugaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Lavalleja, Raúl Argenzio.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 15 y 19 de diciembre de 2000.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto la suplenta correspondiente siguiente, señora Laura Rodríguez Alzugaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes

RESUELVE

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 15 y 19 de diciembre de 2000, al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Raúl Argenzio.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta la suplenta siguiente, señora Laura Rodríguez Alzugaray.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la hoja de votación Nº 11 del Lema Partido Nacional, señor Olegario Machado.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2000.

Oscar Magurno, Guillermo

Alvarez, José María Mieres".

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito se me conceda licencia por motivos particulares desde el 18 al 22 de diciembre inclusive, y se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Carlos Pita
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. Washington Abdala.
Presente.

De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional, Dr. Carlos Pita, manifiesto a Ud. que por única vez renuncio a la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2000.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116

de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley N° 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley N° 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes

RESUELVE

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2000, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la hoja de votación N° 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Alvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2000.

**Oscar Magurno, Guillermo
Alvarez, José María
Mieres".**

7.— Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)

— Continúa la consideración del asunto en debate.

Está en discusión la Sección II, que comprende los artículos 7° y 8°.

SEÑOR MICHELINI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR MICHELINI.— Señor Presidente: básicamente, el artículo aprobado en Comisión es igual al que enviara el Poder Ejecutivo, con una modificación en el tercer inciso de estilo y de concordancia en cuanto al plazo que tiene el organismo para informar al Poder Ejecutivo sobre los emprendimientos y remitir la información correspondiente.

Tal como hicimos en la Comisión, vamos a acompañar con nuestro voto el artículo 7°

porque nos parece correcto que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado tengan el deber de informar acerca de los emprendimientos en los que participen autorizados legalmente. Estamos agregando un aditivo al primer inciso de este artículo, por cuanto tenemos el temor de que la información que esos organismos brinden, en definitiva no sea verificada y controlada por nadie y quede en una situación similar a la que ocurre con los informes del Tribunal de Cuentas, que llegan a la Asamblea General y quedan en la Secretaría del Cuerpo a vista de los legisladores; el hecho de que no haya una Comisión en el Parlamento con la competencia específica de analizarlos, muchas veces hace que esas observaciones no sean debidamente estudiadas.

Por lo tanto, propongo que los funcionarios asignados para participar de los contralores internos de estos emprendimientos actúen bajo la superintendencia técnica de la Auditoría General de la Nación, lo que nos da la impresión de que es una forma de potenciar el contralor de este tipo de grandes emprendimientos.

Reitero: vamos a votar afirmativamente el artículo 7º como viene de Comisión, agregando en el primer inciso esta calidad a los funcionarios asignados al contralor interno de estos emprendimientos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.— Señor Presidente: creemos que esta sección es muy importante y que constituye un avance en nuestra legislación positiva.

Evidentemente, a través del tiempo, varias leyes han ido autorizando a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado a asociarse en diversas formas con entidades públicas y privadas, y el contralor en la gestión de estos emprendimientos ha estado directamente a cargo del Directorio del Ente o Servicio Descentralizado. También debemos tener presente que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución, el control de convivencia y legalidad de la gestión o los actos de los Directorios de esos Entes Autónomos y Servicios Descentralizados lo realiza el Poder Ejecutivo.

Las disposiciones contenidas en esta sección apuntan a una especialización normativa -esto es lo importante- que hasta ahora no existía, frente a estas nuevas formas de negocio. Entre otras cosas, establece la necesaria existencia, en las nuevas asociaciones o emprendimientos, de un órgano de contralor interno integrado por representantes del Ente Autónomo o Servicio Descentralizado en forma proporcional a su participación. Es decir que de aquí en más sólo podrán participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras "cuando el consorcio o sociedad a constituir" -como dice el artículo- "admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno, integrado por sus representantes, y en forma proporcional a su participación". Esto es importantísimo, porque de ahora en adelante deberá admitir esto o no podrá funcionar, es decir, no se podrá constituir.

A ello se agregan diversas exigencias de información al Poder Ejecutivo, entre ellas la del grado de participación en el contralor que actualmente tienen los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados sobre las asociaciones ya realizadas y los respectivos estados contables. Esto es para los que ya están funcionando.

Este es el primer paso. Cuando se tenga toda esa información, se hará una evaluación y se tomarán nuevas medidas, pero estamos absolutamente convencidos de que es un paso trascendental en cuanto a la fiscalización de la intervención de las sociedades comerciales en las que participan los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Si no se hace uso de la palabra, correspondería votar el artículo 7º.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— ¿Me permite, señor Presidente?

Quisiera saber si la Mesa está poniendo a votación los artículos 7º y 8º. Si no fuera así, propondría que se votaran conjuntamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Sucede que se había solicitado que se votaran por separado.

Por lo tanto, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota)

— Sesenta y cuatro en sesenta y cinco:
Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, corresponde votar el artículo 8º.

SEÑOR MICHELINI.— ¿Me permite, señor Presidente?

Creo que antes de poner a votación el artículo 8º habría que votar el aditivo al artículo 7º que figura en la Hoja Nº 8 y que ya fundamenté cuando hice uso de la palabra.

SEÑOR BERGSTEIN.— ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.— Señor Presidente: en primer lugar, ayer olvidé expresar mi satisfacción al hacer uso de la palabra por primera vez bajo la Presidencia del señor Diputado Amaro Cedrés.

En cuanto al tema que se está discutiendo, tengo entendido que hoy aprobamos que todos los aditivos a los artículos agrupados en una sección se trataran al finalizar la sección correspondiente. Por lo tanto, primero habría que votar el artículo 8º y luego los aditivos a la Sección II. Creo que esto fue lo que se resolvió.

SEÑOR MICHELINI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR MICHELINI.— Señor Presidente: no vamos a entrar en un debate con el señor Diputado Bergstein, así que vamos a allanarnos a votar el aditivo que figura en la Hoja Nº 8 al finalizar el análisis de esta sección.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º.

(Se vota)

— Sesenta y ocho en sesenta y nueve: **Afirmativa.**

Léase el aditivo al inciso primero del artículo 7º, que figura en la Hoja Nº 8, presentado por el señor Diputado Michelini.

(Se lee:)

"Los funcionarios asignados a este respecto actuarán bajo la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Sesenta y ocho en sesenta y nueve: **Afirmativa.**

Léanse los aditivos a la Sección II que figuran en la Hoja Nº 9, presentados por los señores Diputados Barrios, Bentancor, Domínguez, Fonticiella y Pintado.

(Se lee:)

"Artículo .— Los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados que participen en los emprendimientos o asociaciones a las que refieren los artículos 7º y 8º de la presente ley serán responsables del cumplimiento de los objetivos y formas de actuación definidas en la norma legal que autorice la constitución de los mismos y sus correspondientes reglamentaciones.

El Tribunal de Cuentas con la información remitida por el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, el que lo hará en las mismas oportunidades y contendrá la misma información y documentación que los informes que sean elevados al Poder Ejecutivo en cumplimiento del artículo 7º, elaborará un informe que remitirá a la Asamblea General en función de sus facultades de fiscalización acerca de la razonabilidad de la información presentada en sus aspectos contables y financieros, así como del grado en que la gestión del emprendimiento o asociación se ha ajustado a los objetivos perseguidos al constituirse.

Artículo .— Declárase por vía interpretativa que la Corporación Nacional para el Desarrollo está incluida dentro de las personas jurídicas obligadas a rendir cuenta documentada o comprobable de su versión, utilización o gestión, de acuerdo a lo establecido por el artículo 567 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y que sus jerarcas y empleados se encuentran comprendidos en los alcances del artículo 572 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 53 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Establécese que el Tribunal de Cuentas deberá dictaminar e informar sobre los estados y balances que formule la Corporación Nacional para el Desarrollo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 552 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996".

— En discusión

SEÑOR FONTICIELLA.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.— Señor Presidente: nuestra fuerza política ha presentado estos dos aditivos convencida por la argumentación expresada por parte de quienes han tenido la iniciativa de elaborar el proyecto de ley, en el sentido de que el espíritu del gobierno es el de llevar adelante la mayor profundización posible en la fiscalización de los negocios que realice el Estado a través de sus empresas, en estas nuevas circunstancias en las que se da la actividad de los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las empresas comerciales públicas.

Nuestra fuerza política tiene muy claro que no sólo debemos quedarnos en decir lo que no está bien, sino que tenemos la responsabilidad de ser, además de fiscales, proponentes de mejores cosas para el país, sobre todo si están en nuestra línea política. La cristalinidad y la transparencia no sólo deben declararse sino que hay que practicarlas, y para eso se deben generar esas herramientas de las que tanto se ha hablado en estos días en el Parlamento, con muy buenos fundamentos. De ahí que, a través de los aditivos que figuran en la Hoja N° 9, estamos proponiendo dos nuevas herramientas que seguramente serán sustento de esa profundización en busca de la cristalinidad y la transparencia.

Con el primer aditivo proponemos que "Los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados" -en esto no estamos incluyendo para nada a los posibles socios privados que pueda tener el Estado en algún emprendimiento con sus empresas- sean "responsables del cumplimiento de los objetivos y formas de actuación definidas en la norma legal que autorice la constitución de los mismos y sus correspondientes reglamentaciones".

Si una ley pone en condiciones a un organismo del Estado para asociarse con empresas privadas, por ejemplo para cumplir

determinadas tareas y llevar adelante emprendimientos con ciertos objetivos y gestiones, ese Ente Autónomo será responsable de que se cumpla estrictamente con lo que prevé la norma.

Para eso es necesario que exista un contralor, pero no para el empresario privado, sino para nuestra empresa pública. El Tribunal de Cuentas es el organismo instituido para llevar a cabo esta fiscalización, pero con la información que remita el Ente Autónomo propietario de las acciones del emprendimiento.

Obviamente, el Tribunal de Cuentas no se estará metiendo en la empresa privada, sino que el Ente será responsable -el Ente es de nosotros y no de los privados- de elevar al Tribunal de Cuentas la información para que éste elabore un informe que deberá remitir a la Asamblea General.

Con esto tenemos la conciencia clara de que estamos interpretando el interés que el gobierno tiene respecto a que se controlen las cosas del Estado; estamos tranquilos porque damos una herramienta más para que eso se lleve adelante, que no costará nada, que no violará los derechos de ningún privado y que posibilitará que el pueblo uruguayo tenga el control de sus dineros en los organismos mixtos.

Con el segundo aditivo proponemos que se declare por vía interpretativa que la Corporación Nacional para el Desarrollo esté incluida dentro de las disposiciones que indican que las personas públicas o privadas que manejan fondos del Estado deben rendir cuentas y ser controladas por el Tribunal de Cuentas.

Sabemos que no es necesario interpretar porque eso cae por su propio peso, pero lo queremos reafirmar taxativamente, pues también está dentro de esa cristalinidad que acá ha sido declarada como objetivo fundamental de la acción de gobierno. Queremos que se tome como un aporte y una herramienta para que este gobierno se sienta respaldado por la oposición en algo que quiere hacer. Obviamente, entendemos que debe hacerse de una mejor forma de lo que está planteado. Quizás no sea perfecto -el señor Diputado Rossi ya se ha extendido al respecto-, pero son herramientas válidas.

Esperamos que de parte de quienes han declarado ese espíritu y ese afán de cristalinidad y fiscalización exista la voluntad política para votar estos aditivos.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).— Señor Presidente: solicitamos que los aditivos que figuran en la Hoja N° 9 se voten por separado.

Vamos a acompañar con mucho entusiasmo el segundo de ellos, pues es realmente preocupante lo que está ocurriendo con la Corporación Nacional para el Desarrollo; no estaba en la intención de quienes promovieron este instrumento hace ya varios años que eso estuviera ajeno a cualquier control, como es el que corresponde al Tribunal de Cuentas.

No vamos a acompañar el primer aditivo propuesto en esta hoja por entender que las competencias que se otorgan al Tribunal de Cuentas, por remisión al artículo 7° del proyecto de ley, tienen que ver con la gestión de los Entes Autónomos. Esto trasciende las propias competencias que el Tribunal de Cuentas debe tener.

SEÑOR FERRER.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERRER.— Señor Presidente: compartiendo lo que señala el señor Diputado Pablo Mieres respecto a que no es una competencia establecida en la Constitución de la República, debo manifestar que el artículo 210 de la Carta establece que por ley también se podrá otorgar otras competencias al Tribunal de Cuentas, más allá de las que taxativamente se indican.

Es en ese sentido que se ha presentado el aditivo referido por el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR MICHELINI.— Señor Presidente: mi fuerza política a veces ha planteado otorgar competencias al Tribunal de Cuentas de acuerdo con el texto constitucional, y recuerdo la iniciativa de la ley cristal. Más que crear un nuevo organismo dentro del Estado, como finalmente la ley anticorrupción o ley cristal lo hizo, nosotros preferíamos dar esas competencias al Tribunal de Cuentas.

Pero creemos que dar un control de gestión al Tribunal de Cuentas tal como se establece en este aditivo es un tema que requiere de

mayor estudio, y por eso no lo acompañamos. No estamos diciendo que desde el punto de vista constitucional sea improcedente. Señalamos que sin un estudio en profundidad no es conveniente aprobarlo.

Sí acompañamos el otro aditivo -como bien lo definió el señor Diputado Pablo Mieres- porque nos parece que la Corporación Nacional para el Desarrollo está prácticamente en rebeldía ante el Tribunal y esto es inadmisibles, pues la legalidad que tiene que controlar el Tribunal de Cuentas incluye también a la Corporación. En el ánimo del legislador nunca estuvo exonerarla de un control como el que tienen todos los organismos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Se va a votar el primer artículo aditivo de la Hoja N° 9.

(Se vota)

— Treinta y nueve en ochenta: **Negativa.**

SEÑOR ROSSI.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.— Señor Presidente: a modo de fundamento de voto, quiero solicitar que este aditivo se envíe a la Comisión especializada correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa pide al señor Diputado Rossi que nos indique cuál entiende que es la Comisión.

SEÑOR ROSSI.— Creo que sería la Comisión de Hacienda, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa solicita al señor Diputado Rossi que haga llegar por escrito su propuesta.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— ¿Me permite, señor Presidente?

Solicito la reconsideración de la Hoja N° 8.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: entiendo que todas las reconsideraciones del caso se soliciten cuando corresponda. Ahora estamos votando la Hoja N° 9. Cuando hayamos votado,

se podrá considerar la solicitud del señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Cuando terminemos de votar la Hoja N° 9, pasaremos a la reconsideración solicitada.

Se va a votar el segundo artículo aditivo de la Hoja N° 9.

(Se vota)

— Cuarenta y uno en ochenta y tres: **Negativa.**

SEÑOR FERRER.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERRER.— Señor Presidente: lamento que los Diputados integrantes de la coalición de gobierno no hayan acompañado este artículo que, en definitiva, no hace más que plasmar lo que en el Mensaje que acompañó este proyecto de ley planteaba el Poder Ejecutivo. En la página 2 se establece textualmente que "se entiende necesario que tales participaciones no se conviertan en islas exentas del debido control de su gestión económico-financiera por parte del Estado uruguayo". Realmente, lamento que no se cumpla a cabalidad con lo que allí se establece.

SEÑOR PONCE DE LEON.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEON.— Señor Presidente: hemos votado lo que vino planteado con pleno conocimiento de su limitación. Esto ya fue explicitado anteriormente y es por ello que no vamos a repetir argumentos.

Lamentamos que estos aditivos no hayan sido aprobados y queremos decir que estamos frente a uno de los temas que sin duda van a tener que ser objeto de legislación por parte de este Parlamento por una u otra vía y, sin duda, en esta Legislatura.

No resiste el análisis el hecho de que los mecanismos de contralor que hoy existen se manejen en dos áreas totalmente diferenciadas. En el área estatal se combina básicamente el control de legalidad del Tribunal de Cuentas con una normativa muy casuística -hasta de más- en relación con todos los procedimientos que estos organismos deben seguir. Por otra parte, está

el área privada, donde los organismos de contralor del Estado sobre las sociedades que operan en la órbita privada son realmente de otra naturaleza porque parten de la base de que los elementos de control de los propietarios se expresan de otra forma y tienen sus propios mecanismos.

Sin ninguna duda, estamos en un punto de inflexión -más allá de opiniones- en cuanto a cuáles son los acentos y los lugares. No cabe ninguna duda del incremento de lo que significan las empresas mixtas y la interacción de elementos de propiedad estatal con un manejo del derecho privado. Y todo esto es absolutamente insuficiente.

Nos sorprende que no se haya votado aquello que tiene relación con la Corporación Nacional para el Desarrollo porque ella es claramente una persona pública. Por lo tanto, una y otra vez no hemos entendido por qué una persona pública no es objeto, al menos, del contralor de legalidad del Tribunal de Cuentas.

El tema de fondo que vamos a tener que considerar en esta Legislatura es la no existencia del mecanismo de contralor para las áreas en las que estamos incursionando, que, siendo una propiedad colectiva, en definitiva quedan libradas a la ausencia total de mecanismos de contralor, salvo los elementos que son discrecionales de cualquier jerarca.

SEÑOR FONTICIELLA.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.— Señor Presidente: muy brevemente queremos decir que nuestra fuerza política propuso ciertas herramientas con la más absoluta convicción y honestidad intelectual, totalmente convencida del discurso de que se quería practicar la cristalinidad. Sin embargo, no fueron aprobadas. Personalmente, tengo dudas de que las herramientas aprobadas sean suficientes e, inclusive, de que la necesaria extensión de la cristalinidad sea un objetivo que se tenga en cuenta.

SEÑOR BERGSTEIN.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.— Señor Presidente: quisiera saber si la votación que acabamos de

realizar corresponde al segundo artículo de la Hoja Nº 9 o si hemos votado en forma negativa la moción de que el artículo pase a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La moción planteada por el señor Diputado Rossi todavía no ha llegado a la Mesa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el aditivo que figura en la Hoja Nº 8, tal como lo había solicitado el señor Diputado Ronald Pais.

(Se vota)

— Ochenta y dos en ochenta y cuatro: **Afirmativa.**

En discusión nuevamente el aditivo al inciso primero del artículo 7º, que figura en la Hoja Nº 8.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: nosotros descontamos que la intención del señor Diputado Michelini al proponer este aditivo es dotar de un mayor rigor técnico al trabajo de las personas designadas en los organismos de contralor interno de las asociaciones, sociedades o emprendimientos que lleven a cabo los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. De todos modos, no me parece que ésta sea una buena solución ni una buena medida, porque no sería adecuado que aquellos funcionarios o personas designadas por los Directorios o por los Directores -ya sea de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados de que se trate, ya sea de los emprendimientos respectivos- tengan que someterse a la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación.

La competencia de la Auditoría Interna de la Nación está muy claramente especificada; no alcanza a la Administración descentralizada, que tiene sus propios órganos internos. Además, existe la posibilidad de que estas empresas sean controladas externamente por el Tribunal de Cuentas y de que sean objeto de un control de conveniencia y de legalidad por parte del Poder Ejecutivo. Habiéndome desempeñado en

una empresa industrial y comercial del Estado como es UTE, imagino cuál será la situación del síndico del Consorcio de Piedra del Aguila que deba requerir la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación para poder actuar. Me parece que esto contribuye de una forma realmente importante a desestimular la participación y la concreción de este tipo de asociaciones. No me pongo únicamente en el lugar de la empresa, sino en el de la contraparte, que no sólo deberá lidiar con el síndico de la parte uruguaya, con el Director o con el Directorio que tenga la empresa descentralizada y con el Director o con el Directorio del Servicio Descentralizado, sino que, además, quien lo controla deberá tener la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación. Con toda humildad, creo que esto es totalmente excesivo, impráctico y que obstaculiza el desempeño empresarial que se tiene como objetivo cuando se integran estas asociaciones. Pretendemos facilitar que las empresas públicas puedan actuar tanto en el interior del territorio nacional como en el exterior; entonces, no exageremos los contralores, los procedimientos ni las supervisiones, de tal forma que representen una dificultad para el accionar que queremos lograr con otros instrumentos jurídicos.

Se ha manejado aquí -no está relacionado con este tema- el ejemplo de ANTEL. Si aprobamos la normativa que se propuso para este Ente -aún no hemos podido examinar el texto que se aprobó en el Senado-, existirán dos contralores adicionales; no sólo será objeto de todos los controles específicos que aprobamos en la Cámara de Diputados -que creo que se mantuvieron en el Senado-, sino que, además, regirán los establecidos en estos artículos. Creo que no hay que agregar más cosas; es loable la finalidad, pero desde el punto de vista legislativo el instrumento resulta malo. Aspiro a que, cuando sea puesto nuevamente a votación, este tema sea votado negativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR MICHELINI.— Señor Presidente: si uno sigue hasta el final el razonamiento recientemente expuesto, llega a la conclusión de que no se deberían acompañar los artículos 7º

y 8º; uno podría decir que, sin perjuicio de reconocer la mejor intención del Poder Ejecutivo y de la coalición de gobierno, estas disposiciones obstaculizan los negocios y los emprendimientos de las empresas públicas y de los Servicios Descentralizados. No, señor Presidente; no es así.

Pensamos que parte del problema del control del Estado en las sociedades modernas es que la dinámica es tan grande -aún más cuando el Estado empieza a participar en negocios a través de las empresas públicas, de los Servicios Descentralizados o de los Entes Autónomos- que la dificultad del control se da, precisamente, por la naturaleza de esos negocios. Nos parece muy loable la voluntad del Poder Ejecutivo de establecer un control, pero si no determinamos algún elemento de referencia, el único control teórico será el que realice el organismo correspondiente del Ente, que tiene un sinnúmero de actividades, además de la de encargarse de este tipo de emprendimientos.

A este síndico o a este tipo de auditor -no sé cuál será el término que lo definirá en la relación contractual- le estamos dando una referencia directa a través de la Auditoría Interna de la Nación que, en última instancia, es parte del Estado, del Poder Ejecutivo. De lo contrario -como lo dijimos en Comisión cuando consideramos este aditivo-, da la sensación de que estamos dejando a esta persona sin ningún tipo de referencia.

Este aditivo apunta a fortalecer el control y de ninguna manera a obstaculizar el desarrollo de estos emprendimientos.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: hemos querido expresar que, en definitiva, estamos llegando a un grado de contralor muy importante. Tenemos el contralor que el Poder Ejecutivo realiza sobre el Directorio a través del Tribunal de Cuentas, el que el Directorio ejerce sobre los representantes del Directorio de la empresa o asociación de que se trate y, a la vez, obligatoriamente debe existir un organismo de contralor interno, por lo que habrá otra persona que también estará cumpliendo esa labor. ¿Qué no va a tener referencias? ¡Claro que las tendrá! En el caso de UTE tendrá la referencia de la División

Económico-Financiera, la del Área de Planificación y Sección Técnica del organismo, la del propio Director y la del Directorio. Digo esto con total respeto hacia los funcionarios y hacia la capacidad técnica de la Auditoría Interna de la Nación, que en muchos casos no es superior a la que existe en estos organismos. Todo lo contrario; muchas veces la capacidad técnica de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados es muy superior a la que existe en la Administración Central. Menciono esto sin menoscabo de los excelentes funcionarios y técnicos que tiene la Auditoría Interna de la Nación. Entonces, decidir que de ahora en adelante, además de los contralores que establece la Constitución, los Entes Autónomos requerirán la superintendencia técnica de un organismo de la Administración Central, me parece excesivo.

SEÑOR MICHELINI.— ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Puede interrumpir el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR MICHELINI.— Señor Presidente: la línea argumental del señor Diputado Ronald Pais se orienta en el sentido de que la intervención de la Auditoría Interna de la Nación no ayudaría. Si el texto dijera que estos funcionarios designados deberían actuar bajo la superintendencia del organismo que determinara el Poder Ejecutivo, ¿el señor Diputado Ronald Pais acompañaría el aditivo? Se lo planteo porque, de esa manera, las observaciones sobre la Auditoría Interna de la Nación ya no corresponderían, pues el Poder Ejecutivo determinaría en cada caso bajo la superintendencia de qué organismo estarían estos funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Puede continuar el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: le respondo al señor Diputado Michelini que no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque creo que las empresas estatales tienen que ser cada vez más empresas estatales y no reparticiones públicas. Si se me preguntara sobre muchas de las medidas de centralización o de contralor centralizado que hoy ejerce el

Poder Ejecutivo sobre las empresas públicas, debería contestar que estoy en absoluto desacuerdo. Pienso que hay que llamar a responsabilidad a posteriori y que tenemos que dar a las empresas públicas la libertad para que se muevan con objetivos empresariales. No creo que sea bueno que el Poder Ejecutivo, el Estado, el Gobierno Central o como se le quiera llamar, centralice una cantidad de actividades de las empresas públicas; hay que respetar la autonomía que la Constitución les ha dado. Inclusive, si de mí dependiera, hasta generaría una reforma constitucional para darles más autonomía. Pero -eso sí- estarían sujetas a resultados y al juicio de los accionistas -que somos todos los uruguayos-; de ese modo, las desprenderíamos del sistema político y cada año tendríamos que juzgar la gestión de sus Directorios y analizar los resultados obtenidos. A la vez, el Estado y los uruguayos, que somos los dueños de esas empresas, no podríamos retirar de ellas más de lo que puede sacar cualquier propietario privado de ese mismo giro de negocios.

Por lo tanto, si lo que se quiere es que algún organismo de la Administración Central -ya sea el Poder Ejecutivo por sí mismo o cualquier otro- establezca más controles de los ya existentes, no estamos de acuerdo.

Ahora, el Poder Ejecutivo hace que se remitan las actas de los Directorios de los Entes Autónomos y tiene la posibilidad de solicitar los informes que desee a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Basta con que haga un instructivo para que pueda contar con toda la información de lo que sucede en las empresas, extranjeras o no.

Si el señor Diputado Michelini propusiera que este aditivo dijera: "podrán actuar con la asesoría técnica de la Auditoría Interna de la Nación", yo estaría de acuerdo. De repente esos auditores podrían recostarse en la experiencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación o de los síndicos, recogiendo un bagaje de conocimientos, porque lo que abunda no daña; esto sería bueno, ya que todos son funcionarios y se trata de una labor de contralor del Estado.

Para nosotros, no es conveniente limitar y hacer depender aún más a las empresas públicas de la Administración Central -aunque sea en mínimos aspectos de gestión- o de expresiones de la propia Administración, sean administrativas, técnicas o políticas.

SEÑOR ROSSI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.— Señor Presidente: desde luego estamos convencidos de que este tipo de temas deben ser considerados cuidadosamente, porque hay que procurar un equilibrio entre la función que debe cumplir el Estado -no puede renunciar a ella- y los intereses que concurren; nosotros no estamos interesados en no incentivarlos, sino todo lo contrario. Para ello es necesario realizar una reunión en otras condiciones y que este tipo de temas no se propongan con soluciones parciales, a partir de proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. De lo contrario, habría que considerar algunos de los proyectos de ley que ya se han presentado, enriqueciéndolos y modificándolos, a fin de procurar una respuesta que sea la más ajustada a las necesidades del país en el presente y a las que tendrá en el futuro.

Como la que se planteó fueron los artículos 7º y 8º, acompañamos esto que es, meramente, la información que se remite desde el propio organismo, pero eso no es contralor.

El aditivo que estamos considerando es un avance, aunque para nosotros sigue siendo insuficiente porque aspiramos a construir un instrumento de otras características. Lo que me lleva a hacer estas precisiones es que no es de recibo que se estén generando elementos de contralor excesivos y que éstos pongan algo en riesgo. Hay hechos que demuestran que lo que se está poniendo en riesgo es la falta de contralor y la aplicación de la norma, cuando ella existe. ¡Ni qué hablar de la no aplicación de ningún tipo de controles donde éstos ni siquiera se prevén! Me refiero a la experiencia vivida por la empresa PLUNA y al proyecto que el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas presentó en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas. En ese sentido, señalamos expresamente que no estaban previstos los mecanismos de contralor para que una empresa actuara con un 80% de gestión en manos de privados y con un 20% en poder de la Administración Nacional de Puertos, pero manejando recursos que hacen al patrimonio nacional.

Por lo tanto, de ninguna manera hay peligro de excesos en este caso, sino la necesidad de ser, realmente, una República que se precie de tal, que esté dispuesta a saber lo que pasa y que no permita que los responsables actúen con

responsabilidad y los irresponsables hagan lo que se les antoje.

SEÑOR FERRER.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERRER.— Señor Presidente: realmente me dejan asombrado algunas intervenciones que hemos escuchado. Comparto plenamente lo que exponía el señor Diputado Rossi y realmente me sorprende escuchar de parte del señor miembro informante en mayoría, la mejor fundamentación en contra del tercer inciso del artículo 7º y a favor del primer aditivo que figura en la Hoja Nº 9.

En definitiva, la fundamentación del señor Diputado Ronald Pais es a favor de una fiscalización externa que realizaría el pueblo. Precisamente, lo que se está planteando en el primer aditivo que figura en la Hoja Nº 9 es una fiscalización externa realizada por el pueblo, a través de sus representantes reunidos en Asamblea General, tal como corresponde según las normas constitucionales, y en contra de que los contralores internos terminen en el Poder Ejecutivo, que es lo que establece el tercer inciso del artículo 7º.

Por tanto, intervengo para mostrar mi asombro ante el carácter de las exposiciones.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: aquí el asombrado soy yo, porque realmente no entiendo nada.

Nuevamente, trataré de ser claro. Los artículos 7º y 8º están creando una figura que ahora pretende, de alguna manera, establecer un contralor interno en aquellas asociaciones o emprendimientos que tengan los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. Estamos totalmente de acuerdo con esto. No es mera información y si alguien afirma que es así, es porque no leyó adecuadamente los artículos; se trata de organismos de contralor interno.

Aparte de estos organismos, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Estado tienen sus representantes en los Directorios. Esto es así en el 99.99% de los casos. No sé si hay un 0.01% que no tenga esa

representación; en todos los casos que yo conozco, el Estado tiene su representación en el Directorio. Además, a esos Directores y a ese síndico los controlan, por un lado, las áreas técnicas que tienen los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y por el otro, el Directorio. Y a todos esos organismos los controla el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas y, muchas veces, el Ministerio del ramo, a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo y, dentro de éste, la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, ¿es necesario tener más controles? A veces no sé si se quiere salvar a ANTEL, a UTE, a ANCAP o si se las quiere matar; honestamente, no lo sé, ¡porque se les ponen tantas trabas para que puedan hacer negocios! Basta con llamar a las Comisiones a los Presidentes de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para preguntarles si se sienten conformes con el marco normativo que hoy tienen para actuar en el giro empresarial.

No me estoy negando a ningún control, sólo estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, pero no con el hecho de que ahora se haga un cruzamiento entre lo que es una administración autónoma o descentralizada -como la de este tipo de organismos- y un órgano como la Auditoría Interna de la Nación, que tiene competencias en otro ámbito del Estado y no en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Y aunque esto implique una superintendencia técnica, significa establecer, por primera vez, un lazo de cierta dependencia que representará ciertas molestias y un funcionamiento burocrático, que va a entorpecer y que no agregará nada.

SEÑOR ROSSI.— Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa señala que no hemos llegado a la primera decena de artículos aprobados. Es más: estamos estancados en el aditivo que figura en la Hoja Nº 8. Sería bueno, pues, que saliéramos de esta situación, ya que no podemos llegar a la consideración del artículo 10.

Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.— Señor Presidente: todos queremos seguir avanzando, pero las cosas se dan como se dan y estamos reconsiderando un aditivo, que ya fue votado, y vale la pena que esto quede claro.

Se hace un recorrido por los elementos de contralor existentes, con la preocupación de que puedan excederse; pero algo falla, algo funciona mal. Las acciones de SITA -que, no se sabe cómo, terminaron cotizándose como lo hicieron- en el momento de integrarse la empresa mixta PLUNA no figuraban en ningún lado; a partir de ese momento, la empresa estatal PLUNA, Ente Autónomo, nunca más pudo ser visada por el Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, tampoco pudo serlo PLUNA S.A. Esto no es algo que pueda suceder en el futuro, sino que ya aconteció y tendríamos que buscar la explicación de dónde estuvo la falla. No estoy leyendo mal el artículo 7º, que dice: "(...) el consorcio o sociedad a constituir admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno (...)". Sí, dice "de contralor interno", ¿pero integrado por quién? Por "sus representantes y en forma proporcional a su participación", lo que implica que el capital privado tendrá el 80% de este organismo de contralor interno de la nueva sociedad anónima de la playa de contenedores. Por lo tanto, es como pedir que me controle a mí mismo y después informe. Hay mucha gente responsable que es capaz de mantener una actitud acorde cuando le toca rendir cuentas de sus actos, pero hay muchos irresponsables, más cuando esto está cruzado por importantes intereses económicos. Acá no estamos hablando de cualquier cosa, sino de importantes intereses que hicieron lo que hicieron en los llamados a licitación que hubo en este país. En este caso no es suficiente formar un organismo de contralor designado por quienes tienen la responsabilidad de la gestión de la empresa. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo recibirá la información recogida por estos organismos de contralor que reflejarán la integración accionaria de la empresa. Esto es absolutamente insuficiente, siendo generoso en el calificativo.

(Apoyado)

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).— Señor Presidente: con la brevedad que merece la hora y el respeto por el tiempo de mis compañeros, en cuanto a este tema que se ha discutido tan arduamente quiero dejar en claro que está en consideración la eficiencia y la eficacia de ese

control y si ésta es la mejor manera de realizarlo para que vaya compaginado con la iniciativa del Poder Ejecutivo y no funcione como un obstáculo al desarrollo de una buena cosa. Quizá, por opinar a la ligera o por apresurarnos, podamos estar perjudicando un sistema de funcionamiento, agregándole un control que no ayuda o no condice con la eficacia con que este tipo de acciones se debe realizar, máxime teniendo en cuenta que en la sección siguiente de este proyecto se propone la creación de una Escuela de Auditoría Gubernamental, que tendrá a su cargo el desarrollo de las medidas de contralor y el estudio y la organización de los patrones de contralor.

Con la tranquilidad que nos den los días venideros, en la construcción progresiva de esto que ha puesto sobre la mesa el Poder Ejecutivo y a la luz de los programas y de las medidas que vaya adoptando la Escuela de Auditoría Gubernamental -que todavía no hemos tratado-, tal vez debamos referirnos a esa escala de normas para homogenizar los contralores. Quizá eso sí sea mucho más ventajoso, dé homogeneidad al control y nos haga ver que someter a la superintendencia técnica a los funcionarios que están desarrollando esa tarea -a veces en otros países- les implicará una serie de trastornos de tiempo, que perjudicará notoriamente la eficacia y la eficiencia, no sólo del contralor, sino de la actividad de la sociedad que integran.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Se ha aprobado la reconsideración del aditivo que figura en la Hoja Nº 8 y pedimos a los señores Diputados que tomen asiento para facilitar el conteo de los votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo al inciso primero del artículo 7º, que figura en la Hoja Nº 8.

(Se vota)

— Treinta y nueve en ochenta: **Negativa.**

SEÑOR BAYARDI.— ¿Me permite, señor Presidente?

Deseo que la Mesa me explique en qué situación quedó el aditivo que figura en la Hoja Nº 8.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— No fue aprobado porque sólo lo votaron treinta y nueve señores Diputados en ochenta presentes.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: la Mesa ha proclamado mal el resultado de la votación y voy a explicar por qué.

Estamos ante un tema que ya hemos discutido en anteriores oportunidades y me llama la atención que haya que cuestionar de vuelta el criterio de la Mesa. El artículo 85 del Reglamento dice: "Fuera de este caso no podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera que se celebre, pudiendo fundarse durante un término no mayor de cinco minutos y resolverse, sin ulterior debate, por mayoría de votos de los Representantes presentes".

El artículo continúa: "Acordada la reconsideración" -cosa que hicimos-, "se reabrirá la discusión de inmediato" -cosa que hicimos- "y para que la resolución pueda ser anulada" -o sea, la resolución que ya tomamos- "o modificada, se requiere la conformidad de un número mayor que el que la sancionó" -fue sancionada por sesenta y ocho votos en sesenta y nueve; es decir, que no hay un número mayor- "o más de la mitad de los votos del total de componentes de la Cámara, según corresponda (Artículo 95)".

Para que esta segunda hipótesis se dé, necesita cincuenta votos negativos, que no tuvo.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.— ¡Qué se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

— Cuarenta y uno en setenta y nueve: **Afirmativa.**

SEÑOR BAYARDI.— ¿Me permite, señor Presidente?

Quiere decir que se mantiene la resolución que ya tomamos.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Sí, señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.— Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

(Murmullos)

SEÑOR VENER CARBONI.— Solicito que se haga silencio en la Sala, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa ampara al señor Diputado en el uso de la palabra.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.— Señor Presidente: hemos votado negativamente este aditivo en función de que compone un conjunto general de propuestas aditivas que marcan una fuerte tendencia a aumentar la infraestructura técnica o las funciones del Estado.

(Murmullos)

— Por lo tanto, va a contrapelo con lo que debe ser el objetivo fundamental en una sociedad moderna: reducir el impacto y la presencia del Estado.

(Murmullos)

— Ruego que se me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa solicita silencio para escuchar el fundamento de voto del señor Diputado Vener Carboni.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.— Señor Presidente: decíamos que este aditivo compone una serie de propuestas que marcan una fuerte tendencia estatista y burocrática, propia de un concepto filosófico que, evidentemente, está superado por la historia.

(Murmullos)

— La asignación de infraestructura o de funciones, que tienen un costo cuyo financiamiento no está previsto en todos estos aditivos, viene a contrapelo con la realidad de reducir el peso del Estado en la economía, de efectuar ahorros que se puedan destinar, fundamentalmente, a disminuir la presión fiscal y así generar mayor competitividad.

(Murmullos)

— Solicito a la Mesa que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa pide nuevamente que se haga silencio y

se respete al señor Diputado que está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar el señor Diputado Vener Carboni.

SEÑOR VENER CARBONI.— Además, solicito a la Mesa que descuente el tiempo utilizado en los pedidos de amparo en el uso de la palabra.

Decíamos que tal vez en otras circunstancias podríamos llegar a mejores y mayores acuerdos, a entender determinadas realidades en cuanto a lo que proponen estos aditivos, si hubiéramos logrado una mayor actualización ideológica de los partidos políticos en el Uruguay. Sé que hay un intento muy fuerte de alcanzar este objetivo a través de talleres propuestos por la comandancia electoral de esos partidos, pero es evidente que los entendimientos son difíciles. Hay algunas personas que procuramos, en una situación económica complicada del país, tanto interna como externa, sacar el carro adelante, pero hay otras que tiran para atrás; aprovechan esa circunstancia para obtener réditos electorales. Esto muchas veces contribuye a la desestabilización.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

— En vista de que no se me ha concedido una prórroga de tiempo debido a las interrupciones, termino aquí mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— La Mesa comunica al señor Diputado Vener Carboni que hizo lugar a su solicitud, y le concedió una prórroga.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: he dicho muchas veces que me he vuelto viejo acá adentro.

No quiero dar consejos de cómo proceder a los amigos de la coalición de gobierno, pero hagámoslo de la siguiente manera. Cuando tengan cincuenta votos, podrán volver a pedir la reconsideración y, además, podrán votar en contra. Mientras tanto no fundemos más el voto por aquello de que cuando se pierde, se pierde, y cuando se gana, se gana. Y sigamos votando los demás artículos a fin de adelantar. Este es un consejo espiritual.

(Hilaridad)

8.— Intermedio

SEÑOR LEGLISE.— Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGLISE.— Señor Presidente: el Partido Nacional solicita que la Cámara pasa a intermedio por el término de una hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Amaro Cedrés).— Se va a votar.

(Se vota)

— Cuarenta y tres en ochenta y tres: **Afirmativa.**

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 17 y 45)

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Abdala)

— Continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 47)

9.— Comisiones Permanentes, integradas y Especiales. (Autorización para reunirse durante el receso)

— Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa, presentada por los señores Diputados Leglise, Amorín Batlle, Fernández Chaves, Chifflet, Bayardi y Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que las Comisiones Permanentes, integradas y Especiales sean autorizadas a reunirse durante el receso parlamentario".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro:
Afirmativa.

10.—Fomento del empleo y mejoras de la Administración. (Normas)

Prosigue la consideración del asunto en debate.

En discusión la Sección III, "Escuela de Auditoría Gubernamental", que comprende los artículos 9º a 11.

Léanse los artículos 9º a 11.

(Se lee:)

"Artículo 9º.— Créase en la órbita del Tribunal de Cuentas la Escuela de Auditoría Gubernamental, con el fin de fortalecer el proceso de capacitación de personal y contribuir al mejoramiento y a la transparencia de la gestión del Estado.

Artículo 10.— La Escuela de Auditoría Gubernamental funcionará con autonomía técnica y estará dirigida por un Consejo Académico de cinco miembros: un representante del Tribunal de Cuentas, que lo presidirá, un representante de la Universidad de la República, un representante de las universidades privadas, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otro de la Auditoría Interna de la Nación. Dicho Consejo Académico tendrá el carácter de honorario.

Artículo 11.— Serán cometidos de dicha Escuela:

- A) Diseñar, impartir y mantener el Programa de Formación y Actualización de Auditores Gubernamentales.
- B) Incluir en el mencionado Programa técnicas modernas de prevención, detección y corrección de fraudes y corrupción administrativa en el sector público.
- C) Establecer sistemas de capacitación basados en tecnología de punta para la transmisión e interacción real de conocimientos y experiencias en el ámbito nacional, regional e internacional.
- D) Operar el sistema de actualización de Auditores para la renovación anual de

sus conocimientos y habilidades, llevando el control del proceso.

E) Organizar eventos técnicos sobre materias de su especialidad mediante la realización de foros, talleres o seminarios abiertos al público.

F) Establecer un centro especializado de documentación y biblioteca de consulta, realizar investigaciones y editar y publicar sus resultados.

G) Administrar los recursos financieros derivados de sus operaciones académicas y de otras fuentes alternativas de financiamiento, todo ello de conformidad con el programa anual de actividades y al presupuesto operativo que haya sido formalmente aprobado por el Consejo Académico".

— En discusión.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: en este caso no vamos a pedir ningún desglose, por lo que estamos en condiciones de votar la Sección III en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Sección III, que comprende los artículos 9º, 10 y 11.

(Se vota)

— Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve:
Afirmativa.

En discusión la Sección IV, "Normas concursales", que comprende los artículos 12 a 32.

Léanse los artículos 12 a 32.

(Se lee:)

"Artículo 12.— Créanse dos Juzgados Letrados de Concursos, por transformación de dos Juzgados Letrados en Primera Instancia en lo Civil.

Estos Tribunales conocerán en primera instancia en todos los procedimientos concursales: concursos civiles, concordatos,

moratorias de sociedades anónimas, quiebras y liquidaciones judiciales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo.

Artículo 13.— El fuero de atracción previsto en el artículo 1575 del Código de Comercio y en el numeral 5) del artículo 457 del Código General del Proceso, será aplicable a todos los procesos concursales.

El Tribunal del Concurso asimismo será competente:

- A) En las acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989).
- B) En las acciones reivindicatorias y revocatorias concursales previstas en el Código de Comercio.

Artículo 14.— Sustitúyense los artículos 70 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, y 1767 del Título XIX del Código de Comercio, los que quedarán redactados de la siguiente forma.

'ARTICULO 70.— Admitida la gestión el Juez nombrará en el mismo acto dos acreedores elegidos entre los doce de mayor monto que no sean privilegiados, ni sociedades vinculadas controlantes o integrantes de un mismo grupo económico con la gestionante, con la finalidad de intervenir e informar sobre el giro de los negocios.

ARTICULO 1767.— La intervención que tendrá el alcance del artículo 316 del Código General del Proceso, supondrá en todos los casos el control de los movimientos de dinero y mercaderías del giro de la gestionante y ésta deberá rendir cuentas a los Acreedores Informantes de tales movimientos habidos desde la fecha de los Estados Contables adjuntos a la gestión hasta el momento de la efectiva intervención. La intervención será practicada individualmente por el acreedor que haya aceptado el cargo y hasta el momento que el otro acreedor acepte su designación, a partir del cual la intervención será ejercida en forma conjunta. Los acreedores designados deberán informar, previo examen de los libros y demás papeles de la sociedad, sobre la marcha del giro empresarial, la exactitud de los documentos anexos a la gestión y sobre las bases de la petición

concurzal. La designación podrá recaer en entidades gremiales representativas con actuación en materia concursal'.

Artículo 15.— Constatada la demora en la aceptación de los cargos previstos en los artículos 20 y 70 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, el Tribunal designará de inmediato, como Síndico provisorio o como informante, a una persona que figure en la lista de Síndicos de acuerdo a lo previsto en el artículo 469.2 del Código General del Proceso.

La referida lista podrá integrarse por representantes de instituciones gremiales con personería jurídica.

Artículo 16.— En todo concurso civil, concordato preventivo o moratoria, se podrá crear, a iniciativa de cualquier acreedor concursal, del contador interventor o de los Acreedores Informantes, una Comisión de Acreedores de hasta cinco miembros, integrada por alguno o algunos de los acreedores concursales o entidades gremiales representativas de acreedores. También podrán integrarla acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados sin que ello implique la renuncia a sus derechos prevista en el artículo 1556 del Código de Comercio y en el artículo 41 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893.

La constitución de la Comisión se efectuará en una reunión de acreedores celebrada judicial o extrajudicialmente, con asistencia de acreedores que representen al menos el 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios denunciados por el deudor. Si la reunión se celebrara extrajudicialmente, se labrará acta firmada por los asistentes y protocolizada notarialmente, cuyo testimonio se agregará al expediente judicial para el conocimiento del Juez del concurso.

Artículo 17.— La Comisión de Acreedores tendrá como cometidos:

- A) Asesorar al Tribunal, al Interventor, al Síndico o a los Acreedores Informantes en todos aquellos asuntos en que su opinión le sea requerida.
- B) Proponer medidas urgentes para la conservación de los bienes del deudor y el control de sus actividades, pudiendo solicitar al Tribunal la ampliación de

las facultades del o de los interventores designados.

- C) Intervenir en las tratativas con el deudor analizando la factibilidad de las fórmulas de acuerdo propuestas.
- D) En caso de que se celebre un concordato extrajudicial o privado la Comisión de Acreedores cumplirá los cometidos que le asigne dicho acuerdo.
- E) Recomendar la quiebra, liquidación judicial o concurso necesario, cuando de su labor de asesoramiento se haya constatado la inviabilidad de la fórmula concursal o una situación patrimonial deficitaria, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 de la presente ley.

Artículo 18.— Las publicaciones dispuestas por las normas vigentes que regulan los distintos procesos concursales se efectuarán solamente en el Diario Oficial y por el término de tres días.

En el caso de concursos necesarios, quiebras o liquidaciones judiciales cuando no existan recursos disponibles ni suficientes para cubrir el costo de las publicaciones, el Tribunal ordenará su realización sin cargo, oficiando a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

Tratándose de procesos concursales preventivos el deudor deberá acreditar ante el Tribunal las publicaciones realizadas acompañando un ejemplar que será entregado al Actuario dentro del término de quince días hábiles a contar de la notificación del auto que las ordenó. Si así no lo hiciera el Tribunal revocará el auto de admisión o la moratoria concedida y decretará el concurso necesario, la quiebra o liquidación judicial.

Modifícanse las normas concursales vigentes en cuanto establecen la publicación íntegra de los textos concordatorios o de las sentencias, disponiendo que bastará que se publique un extracto de su contenido previo control de la Oficina Actuarial.

Artículo 19.— En todos los procedimientos concursales preventivos, deberá disponerse, por el Juez del concurso, en el auto de admisión, la inscripción de la solicitud en el Registro Nacional de Actos Personales. El deudor deberá acreditar la inscripción en el

plazo de diez días hábiles a contar de la fecha de libramiento del oficio. En caso de omisión, la sede, sin más trámite, revocará el auto de admisión y decretará el concurso necesario, la quiebra o la liquidación judicial del deudor.

También se ordenará la inscripción de las quiebras, liquidaciones judiciales o concursos necesarios que se decreten y no existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales para la inscripción de estas interdicciones o para la obtención de informaciones requeridas por el Tribunal, éste las dispondrá de oficio sin cargo.

Artículo 20.— Si por cualquier causa, el proceso de quiebra, liquidación judicial o concurso necesario se encontrare paralizado por un término que exceda los seis meses, cualquier acreedor, que justifique su crédito, podrá pedir la clausura de los procedimientos con iguales efectos a los previstos para la clausura de la quiebra por insuficiencia de activo (artículos 1711 y siguientes del Código de Comercio).

Artículo 21.— En los procesos concursales preventivos que se encuentren paralizados en sus trámites por un término que exceda los seis meses o en que se constate la inactividad del deudor en la explotación de su giro o la insuficiencia de sus activos para cumplir con los pagos por él ofrecidos, a pedido de cualquier acreedor y previa vista del Ministerio Público y del deudor, el Tribunal podrá decretar el concurso necesario, la quiebra o la liquidación judicial.

Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente, los casos en que el deudor presente al Tribunal un acuerdo, firmado por las mayorías de acreedores, exigidas por las distintas normas concursales, en el cual se acepten las circunstancias referidas.

Artículo 22.— En los distintos procedimientos de concordato preventivo judicial o concurso civil, las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores concursales presentes.

Artículo 23.— Agrégase al artículo 1771 del Código de Comercio (Título XIX) el siguiente inciso:

'Si el Tribunal deniega la moratoria, decretará sin más trámite la liquidación judicial de la sociedad anónima solicitante, salvo que ésta demuestre que canceló el pasivo personal concursal o logró la adhesión de sus acreedores para un concordato preventivo'.

Artículo 24.— En los casos de concordatos preventivos, moratorias o concursos civiles voluntarios, los créditos de los acreedores, se considerarán incobrables a todos los efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva (DGI), desde el momento de la concesión de la moratoria provisional. Los tributos correspondientes deberán liquidarse por los acreedores a medida que se produzca la cobranza concursal respectiva. Igual tratamiento de incobrabilidad recibirán desde el auto declaratorio, los créditos respecto de cuyos deudores se haya decretado la quiebra, liquidación judicial o el concurso necesario.

Artículo 25.— A partir de la sanción de la presente ley, en los distintos procedimientos concursales comerciales que se inicien, la moratoria provisional dispuesta por el artículo 1545 del Código de Comercio así como la prevista en los numerales 1º y 2º del artículo 69 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, no podrá exceder del término de un año contado desde la fecha de su concesión. El Tribunal, excepcionalmente, podrá extender este plazo, cuando el mismo resulte necesario para culminar los procedimientos pendientes para la homologación del concordato presentado.

Artículo 26.— Modifícase el numeral 1º del artículo 1019 del Código de Comercio el que quedará redactado de la siguiente forma:

'1º Las acciones provenientes de vales, conformes o pagarés contra el librador, si la deuda no ha sido reconocida por documento separado.

Los cuatro años se contarán desde el vencimiento o desde la fecha de la sentencia de condenación prevista en el artículo 1606 de este Código en su caso'.

Artículo 27.— Sustitúyese el artículo 1026 del Código de Comercio por el siguiente:

'ARTICULO 1026.— La prescripción se

interrumpe por cualquiera de las maneras siguientes:

1º Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.

2º Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.

3º Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo domicilio se ignorase.

4º Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.

La prescripción interrumpida comienza a correr de nuevo: en el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4º, comienza a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal.

En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo dispuesto por los artículos 1216 y 1220 del Código Civil".

Artículo 28.— Las resoluciones adoptadas por el Tribunal Concursal serán impugnables en los plazos y por los medios previstos en el Capítulo VII del Título VI del Libro I del Código General del Proceso. En todos los casos la apelación de las resoluciones que se adopten en materia concursal no tendrán efectos suspensivos salvo que el Tribunal superior así lo disponga (numeral 2) del artículo 251 del Código General del Proceso).

Artículo 29.— Modifícase el artículo 452 del Código General del Proceso, el que quedará redactado de la siguiente forma:

'ARTICULO 452. (Ejecución colectiva).— Procede la ejecución colectiva cuando el deudor se encontrare en estado de cesación de pagos, la que se realizará mediante el concurso necesario para el deudor civil y la quiebra para el comerciante o la sociedad o comercial y la

liquidación judicial para la sociedad anónima.

La quiebra y la liquidación judicial se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y por la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, y sus modificativas'.

Artículo 30.— Modifícase el artículo 453 del Código General del Proceso el que quedará redactado de la siguiente forma:

'ARTICULO 453. (Medidas preventivas de la ejecución).— La ejecución colectiva del deudor comerciante podrá evitarse mediante la presentación de una solicitud de concordato preventivo o moratoria que cumpla con las exigencias previstas en el Código de Comercio, o en la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, y concordantes.

El deudor civil podrá celebrar acuerdos de pagos con sus acreedores, en oportunidad de celebrarse la Junta de Acreedores tal como se prevé en el artículo 460.4'.

Artículo 31.— Los Juzgados creados por la presente ley deberán comenzar a funcionar en un plazo no mayor de noventa días a partir de su promulgación.

Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo remitirán a los Juzgados Letrados de Concursos, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en funcionamiento, todos los expedientes con procesos concursales en trámite en el estado en que se encuentren. Los expedientes civiles que estuvieran tramitando hasta entonces los Juzgados transformados, serán redistribuidos entre los demás Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, por el procedimiento que disponga la Suprema Corte de Justicia. Si la convocatoria a Junta o reunión de acreedores ya hubiere sido publicada, la remisión se efectuará después de su celebración. Si por cualquier circunstancia el expediente no se encontrare en el Juzgado actuante, la remisión se efectuará, de inmediato, una vez que le fuera devuelto.

Artículo 32.— Las normas concursales contenidas en la presente ley se aplicarán desde su vigencia a los procedimientos en trámite".

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: con respecto a la Sección IV, "Normas concursales", solicitamos que se desglose el artículo 12. Tenemos entendido, además, que se ha presentado una moción para el desglose del artículo 18.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR PAIS (don Ronald).— Señor Presidente: solicito el desglose del artículo 14.

SEÑOR BERGSTEIN.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.— Señor Presidente: solicito el desglose del artículo 25.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, correspondientes a la Sección IV.

(Se vota)

— Sesenta y dos en sesenta y cuatro: **Afirmativa.**

En discusión el artículo 12, que fue desglosado.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: pedimos que los artículos desglosados sean considerados en la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— En consecuencia, los artículos 12, 14, 18 y 25 serán considerados en la sesión de mañana.

En discusión la Sección V, "Licencia especial para los funcionarios públicos o trabajadores privados que adopten menores", que comprende los artículos 33 a 39.

Léanse los artículos 33 a 39.

(Se lee:)

"Artículo 33.— Todo trabajador dependiente, afiliado al Banco de Previsión Social (BPS), que reciba uno o más menores de edad, en las condiciones previstas por la presente ley, tendrá derecho a una licencia especial de seis semanas continuas de duración.

La licencia especial con goce de sueldo establecida en el inciso primero del presente artículo constituye una excepción al régimen de licencias especiales establecido por el artículo 37 de la Ley N° 16.104, de 23 de enero de 1990, para los funcionarios públicos.

Artículo 34.— Quedan comprendidos en lo establecido en el artículo 33 de la presente ley, quienes, en virtud de una disposición legal, pronunciamiento judicial o resolución del Instituto Nacional del Menor (INAME) reciban menores a los efectos de su posterior adopción o legitimación adoptiva.

El derecho establecido en el artículo 33 de la presente ley, sólo podrá ejercerse a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor.

Artículo 35.— Sólo podrá hacer uso de esta licencia especial uno u otro integrante del matrimonio beneficiario o el beneficiario en su caso.

Artículo 36.— Los trabajadores del sector privado que hagan uso de la licencia especial prevista y por el período de la misma, serán beneficiarios, como única compensación por dicha inactividad de un subsidio a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), que se registrará en lo pertinente de acuerdo a lo establecido para el subsidio por maternidad en los artículos 15 y 17 del Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y las disposiciones modificativas y concordantes.

El funcionario público continuará perci-

biendo su retribución habitual del organismo en el cual cumple funciones, durante el goce de la licencia especial.

Artículo 37.— Los interesados deberán acreditar la situación referida en el artículo 34 de la presente ley, mediante testimonio del decreto expedido por el Juez competente, constancia expedida por el Instituto Nacional del Menor (INAME) o en caso de adopción mediante testimonio de la respectiva escritura pública.

Artículo 38.— La licencia especial referida deberá gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

El empleador o el jerarca del organismo respectivo, en su caso, dispondrá de un plazo máximo de cinco días corridos para el otorgamiento de la licencia, desde que se acrediten los extremos requeridos por la presente ley.

El beneficio caducará de pleno derecho si los interesados no ejercitan su reclamo antes de los treinta días a contar de la fecha en que se haga efectiva la entrega del menor.

Artículo 39.— El interesado que, actuando dolosamente, induzca a engaños para obtener los beneficios de la Sección V de la presente ley, deberá restituir el importe de lo que se le haya abonado durante el período de la licencia especial debidamente actualizado, sin perjuicio de otras consecuencias a que hubiere lugar de acuerdo a derecho".

— En discusión.

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: solicitamos el desglose de los artículos 33 y 35.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 34, 36, 37, 38 y 39.

(Se vota)

— Sesenta y cinco en sesenta y siete: **Afirmativa.**

En discusión la Sección VI, "Recursos administrativos", que comprende los artículos 40 a 42.

Léanse los artículos 40 a 42.

(Se lee:)

"Artículo 40.— Declárase, a los efectos establecidos por el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República, que el término de ciento veinte días previsto por el inciso primero de su artículo 318 sólo es aplicable a los recursos de revocación y de reposición, incisos primero y cuarto del artículo 317 de la Constitución de la República, al decidir los cuales "la autoridad administrativa" resuelve recursos interpuestos "contra sus decisiones". Dicho término no rige para la resolución de los recursos jerárquicos de anulación y de apelación incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 317 citado, los cuales tienen por objeto decisiones no adoptadas por los órganos que resuelven dichos recursos. Todo ello, sin perjuicio de la obligación de resolver los recursos administrativos cuya decisión le competa, que recae sobre todo órgano administrativo.

Artículo 41.— Modifícanse los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

'ARTICULO 5º.— A los ciento cincuenta días siguientes al de la interposición de los recursos de revocación o de reposición, a los doscientos días siguientes a la interposición conjunta de los recursos de revocación y jerárquico, de revocación y de anulación, o de reposición y apelación, y a los doscientos cincuenta días siguientes al de la interposición conjunta de los recursos de revocación, jerárquico y de anulación, si no se hubiere dictado resolución sobre el último recurso se tendrá por agotada la vía administrativa.

ARTICULO 6º.— Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de doscientos, en su caso, se deberán franquear, automáticamente, los recursos subsidiariamente interpuestos, reputándose fictamente confirmado el acto impugnado.

El vencimiento de los plazos a que refiere el inciso primero del presente artículo no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución de la República). Si ésta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del actor, en el momento de dictarse sentencia por el Tribunal respecto de la acción de nulidad que aquél hubiere promovido'.

Artículo 42.— La modificación de los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987, dispuesta por el artículo 41 de la presente ley se aplicará a los actos administrativos dictados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley".

— En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

— Sesenta y cuatro en sesenta y siete: **Afirmativa.**

11.— Intermedio

SEÑOR BAYARDI.— Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.— Señor Presidente: en este momento, mocionamos para que la Cámara pase a intermedio hasta el día de mañana, a la hora 10.

SEÑOR PRESIDENTE (Abdala).— Se va a votar.

(Se vota)

— Sesenta y nueve en setenta: **Afirmativa.**

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 18 y 52)

Dr. WASHINGTON ABDALA
PRESIDENTE

Dra. Margarita Reyes Galván
Secretaria Relatora

Dr. Horacio D. Catalurda
Secretario Redactor

Mario Tolosa
Director del Cuerpo de Taquígrafos

C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S

XLV LEGISLATURA

PRIMER PERIODO ORDINARIO

INTEGRACION DE LA MESA

PRESIDENTE

1er. Vicepresidente

2do. Vicepresidente

3er. Vicepresidente

4to. Vicepresidente

Secretario Redactor

Secretaria Relatora

Prosecretario

Prosecretario

Washington Abdala

Ricardo Berois Quinteros

Margarita Percovich

Felipe Michelini

Juan Justo Amaro Cedrés

Horacio D. Catalurda

Margarita Reyes Galván

José Pedro Montero

Enrique Sención Corbo